



Cruz



J-00138912-1



AÑO LXXXI / No. 816 / AGOSTO 2019

Si **empoderamos** a familias y comunidades **víctimas de la violencia**, y promovemos la inclusión en función de la solución de nuestros problemas, podremos superar el aislamiento y sometimiento para **desnormalizar y reducir los homicidios en Caracas.**



Conoce nuestros proyectos y súmate a la Caracas de la convivencia ingresando en
MICONVIVE.COM



CARACAS MI CONVIVE



@MICONVIVE

Fundador	Manuel Aguirre Elorriaga, s.j.
Director Centro Gumilla	Manuel Zapata, s.j.
Director SIC	Alfredo Infante, s.j.
Jefe de Redacción	Daniela P. Aguilar P.
Coordinadora de redacción	Marlene García
Administración	José Yguaro
Diseño y diagramación	Elena Roosen
Fotografía de portada	Sergio González
CENTRO GUMILLA	Parroquia Altavracia Esquina de La Luneta, Edif. Centro Valores, P.B., local 2 Apartado 4838 Teléfonos (0212) 564 9803 564 5871 Fax: (0212) 564 7557 Caracas, Venezuela. ZP 1010
Web institucional	gumilla.org
SIC digital	www.revistasic.gumilla.org
En Facebook	facebook.com/CGumilla
En Twitter	@CentroGumilla
En Instagram	@cgumilla
BUZONES DE CORREO ELECTRÓNICO	
Redacción SIC:	sic@gumilla.org
Suscripciones:	documentacion@gumilla.org suscripcion@gumilla.org
Comercialización y distribución:	distribucion@gumilla.org
FORMA DE PAGO	<ul style="list-style-type: none"> • Pagando en nuestras oficinas. • Depositando a nombre de Fundación Centro Gumilla, en la siguiente cuenta: Banesco, cuenta corriente No.0134 0413 5941 3101 0414
	RIF J-00138912-1
Depósito Legal	pp. 193802DF850
Depósito Legal (SIC formato digital)	DC2017000628
ISSN	0254-1645
ISSN (SIC formato digital)	2542-3320
Hecho en la República Bolivariana de Venezuela	por Gráficas Lauki C.A.



EDITORIAL

No más tortura	242
----------------	-----

EL PAÍS POLÍTICO

Testimonio de torturas en cárcel militar chavista Sebastiana Barráez	244
Víctima venezolana del castrochavismo Pedro Corzo	248
¿La vía más corta para llegar a la CPI? Rafael Uzcátegui	249
Reflexiones sobre el cambio en el poder Juan Salvador Pérez	252

ENTORNO ECONÓMICO

Cómo relanzar el aparato productivo venezolano Juan Francisco Mejía Betancourt	255
--	-----

ECOS Y COMENTARIOS

"Solución" exprés	258
-------------------	-----

DOSSIER

"Por una frontera garante de los derechos humanos" Wooldy Edson Louidor	259
--	-----

SOLIDARIDAD SOCIAL

<i>Olla solidaria</i> : un signo de solidaridad desde la fe Javier A. Fuenmayor T., s.j.	271
Jóvenes venezolanos en alto riesgo social Robert Rodríguez, s.j.	273

RELIEVE ECLESIAL

Claves del documento de Puebla Pedro Trigo, s.j.	277
---	-----

VENTANA CULTURAL

A la Juventud venezolana Carlos Cruz-Diez (†)	281
--	-----

HORA INTERNACIONAL

América: un continente en movimiento Carolina Jiménez Sandoval	283
---	-----

VIDA NACIONAL

Al margen de la realidad	286
--------------------------	-----

J-00138912-1



SIC no se responsabiliza por los juicios y opiniones de los artículos firmados. Esta responsabilidad compete a sus autores. En caso de reproducción total o parcial de los artículos, se agradece citar la fuente.

No más tortura

Para la Iglesia la vida es sagrada. La dignidad humana está por encima de cualquier poder. El Estado está llamado a garantizar los derechos humanos, no a violarlos. Hoy, en Venezuela, la tortura, los tratos crueles y degradantes por parte de los cuerpos de seguridad no son un hecho aislado, obedecen a una política sistemática de Estado. La tortura está tipificada como crimen de lesa humanidad. El *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos* regula su prohibición absoluta en el artículo 7, donde reza: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes...”. Los venezolanos, en nuestra Constitución contemplamos en el artículo 43 que:

... el derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma.

Nuestra realidad contrasta con estos principios. Se observa cómo, desde 2009, con la detención arbitraria de la doctora Afiuni —jueza sentenciada públicamente en cadena nacional por el finado y entonces presidente de la República Hugo Rafael Chávez Frías—, se viene aplicando la detención arbitraria y la tortura como recursos de amedrentamiento y control de los poderes, en este caso del Poder Judicial. La doctora Afiuni, actuando institucionalmente, apegada a la Constitución y siguiendo las recomendaciones de la ONU, había otorgado unas medidas cautelares a Eligio Cedeño, decisión que se convirtió en tragedia para la jueza debido a que el detenido en cuestión era de interés presidencial. En julio de 2015, después de varios años de prisión, la doctora Afiuni declara haber sido sometida a tortura y tratos crueles: “A mí me vaciaron el útero, porque lo tenía vuelto mierda. Pero no contentos con eso, se me destruyó la vejiga, la vagina y el ano. Yo estoy reconstruida”.

Este hecho ha generado lo que se conoce como *el efecto Afiuni*, que no es otra cosa que el control total, por la vía del miedo, del Ejecutivo hacia el Poder Judicial.

De igual modo, los testimonios registrados por las ONG de DD.HH. en las protestas de 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019 dan cuenta de que los tratos degradantes y la tortura no son eventos aislados, sino un modo de represión sistemático que expresa una política de Estado. Se trata de un listado extenso difícil de enumerar, lleno de rostros y biografías de personas –en su mayoría jóvenes– que han entregado su vida por Venezuela. En estos casos tales mecanismos de represión se han utilizado sistemáticamente con el fin de desmovilizar social y políticamente a la población.

Después de las parlamentarias de 2015, cuando las fuerzas democráticas ganan legítimamente el Parlamento, se inicia una confrontación entre los poderes cooptados por el Ejecutivo Nacional en contra de la Asamblea Nacional (AN). Los ataques sistemáticos hacia los miembros de la AN, la persecución, detención arbitraria de los diputados y la emblemática tortura de Juan Requesens como corolario de este proceso represivo, es un indicador claro de que se trata de una política de Estado. El 10 de agosto de 2018 fuimos sorprendidos por un video que circuló por las redes donde el diputado Juan Requesens, quien había sido detenido arbitrariamente, aparecía drogado y torturado dando declaraciones en contra de Julio Borges, para entonces presidente de la AN, hoy refugiado en Colombia. El hecho fue tan horrendo, que el poeta Armando Rojas Guardia lo describió así: “me estremece la percepción de que ya hemos ingresado al horror literalmente obsceno, al terreno minado de la pornografía política”.

También miembros del nivel municipal del Poder Público han sido violentados en el sagrado derecho a la vida por la vía de la tortura. El 8 de octubre de 2018, el mártir por la democracia, Fernando Albán, concejal del Distrito Metropolitano, fue lanzado por una ventana del edificio del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en Caracas, donde se encontraba detenido arbitrariamente y había sido cruelmente torturado por el régimen.

Su asesinato causó gran conmoción, dolor e impotencia en los sectores populares y las iglesias. Eran los dos ámbitos de Fernando Albán: acompañar a las organizaciones sociales de base para responder al desafío humanitario y convidar a las iglesias, de distintos credos, a una cruzada por la vida desde la no violencia activa. Lo hacía con pasión. Su modo de vivir y hacer política, que le otorgó una gran credibilidad y *autoritas*, se convirtió en una amenaza para el poder *de facto*. La supuesta “versión oficial” de los hechos, en boca del fiscal Tarek Williams Saab, responde a un suicidio: “Murió tras saltar

desde la ventana de un décimo piso”, dijo entonces. No obstante, quienes conocimos a Fernando Albán sabemos que, por sus hondas raíces cristianas, católicas, de amor y defensa de la vida, la versión del régimen es una mentira que busca banalizar el crimen y disfrazar la verdad. Así lo señalaron también representantes de la Arquidiócesis de Caracas, el partido Primero Justicia, la ONG Foro Penal, entre otros.

El estrato militar tampoco ha estado inmune. Los miembros de las Fuerzas Armadas que se han desmarcado del régimen han sido tratados con ensañamiento e imputados de traición a la patria, instigación a la rebelión y contra el decoro militar. El reciente fallecimiento del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, detenido el 21 de junio y torturado hasta arrebatarle la vida el sábado 29 a la 1 de la madrugada, por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), pone nuevamente en evidencia la tortura como política de Estado. Según la abogada Tamara Suju, el capitán “llegó a tribunales en silla de ruedas, presentando graves signos de torturas. No hablaba, solo pedía auxilio a su abogado. No entendía ni escuchaba bien... El juez ordenó su traslado a un centro de salud en el que falleció a la 1:00 a.m.”. En el contexto del asesinato del capitán de corbeta, Provea –ONG de derechos humanos–, publicó un comunicado avasallante: “el pasado 29 de junio Provea dio a conocer que, de los 100 casos de tortura registrados durante 2018, 75 fueron cometidos por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)”¹, el mismo cuerpo de seguridad que tenía bajo custodia al capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Fue, por lo tanto, el organismo que más torturó en 2018, y desde 2017 se vienen incrementado las denuncias contra dicho organismo policial, tanto por prácticas de tortura como por desaparición forzada de personas.

Este recorrido deja claro que la tortura es hoy, en Venezuela, una política sistemática de Estado, dirigida desde el Ejecutivo y doblegada con el fin de aterrorizar, amedrentar y doblegar al resto de los poderes públicos: Judicial (caso Afiuni), Legislativo (Juan Requesens), en el nivel Municipal (caso Albán), así como la desmovilización de la sociedad civil (coaccionando líderes de protestas) y, también, controlar por vía de la fuerza a sectores descontentos y disidentes de las Fuerzas Armadas (caso ilustrativo el de Rafael Acosta Arévalo). Mientras, el fiscal general y el defensor del pueblo hacen silencio cómplice, aun sabiendo que la tortura es un crimen de lesa humanidad y estos, por su naturaleza, no prescriben.

NOTA:

1 PROVEA. (29 de junio 2019): *La DGCIM el organismo que más torturó en 2018*.

Recuperado de: <https://www.derechos.org/ve/actualidad/dia-internacional-en-apoyo-a-las-victimas-de-la-tortura-488-casos-de-tortura-registro-provea-entre-2013-y-2018>



AFP / RAÚL ARBOLEDA / GETTY IMAGES

Una práctica recurrente en Venezuela

Testimonio de torturas en cárcel militar chavista

Sebastiana Barráez*

En los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Caracas, han estado y están actualmente detenidos los oficiales considerados de mayor riesgo político y militar por el gobierno de Nicolás Maduro, a excepción del general en jefe (Ej) Raúl Isaías Baduel y el capitán (GNB) Juan Carlos Caguaripano

nfobae conversó con un oficial que permaneció en las celdas del DGCIM hasta hace unos meses, cuando el coronel Rafael Antonio Franco Quintero era el director de investigaciones de esa institución.

Solo estuvo 45 días en el año 2017, pero durante ese tiempo detenido este alto oficial, que ascendió de primero hasta los más altos grados en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), vio y vivió hechos aterradores. En consecuencia, hemos resguardado su nombre para protegerlo a él y a su familia.

“Los muchachos que conozco de la Marina y están allí presos son oficiales ejemplares, de primera, todos de la Infantería de Marina, de Operaciones Especiales”, afirma. El costo para las familias es muy alto: “solamente tres horas de visita a la semana en el DGIM (refiriéndose al actual DGCIM). Para que tenga una idea, por ejemplo, en la cárcel de Ramo Verde el régimen es

abierto, tienen hasta cantina, cocinas, la visita se puede recibir en la propia celda, tienen televisores y creo que unos dos o tres días de visita desde la mañana hasta la tarde”.

– **¿Cómo es en la DGCIM?**

– En la DGCIM se tortura incluso a las familias, porque tienen que recorrer largas distancias, pagar hoteles, transporte, para tres horas de visita que en oportunidades las cancelan sin previo aviso. Allí vi gente venir de Margarita con sus hijos pequeños, o de la región andina, personas muy humildes, y no poder visitar a su familiar sin que se les haya avisado con tiempo. Es todo muy cruel, mucho más de lo que la propia imaginación puede recrear.

– **¿Usted estuvo en tiempos del coronel Franco Quintero?**

– Sí, ese coronel, en mi opinión, es un psicópata. Nunca imaginé que una persona así pudiese, no solo ser parte de la FANB, sino considerarse humano. Su paso por la DGCIM fue terrible.

– **¿Por qué él en particular?**

– Porque él fue quien cambió toda la rutina y condiciones de encarcelamiento a condiciones inhumanas...

– **Describame ese lugar, cuando estuvo ahí**

– Las celdas son herméticas, las puertas son de lámina de hierro, no de barrotes. Con una ventana pequeña que también permanece cerrada 24 horas; el encierro es absoluto, no se puede ver hacia afuera de la celda. No tienen baño y las necesidades, salvo cuando se lo permiten, se hacen en bolsa plástica las sólidas y en potes de plástico las líquidas. Prohibió los libros, inclusive las biblias, prohibió suplementos alimenticios, nada que no fuese agua, quitó el teléfono del pasillo y creó la norma de los tres minutos una vez al día.

– **¿Recuerda algún caso cruel?**

– En una de las celdas había cuatro jóvenes reos llaneros que tenían meses allí sin que sus familias supiesen si estaban vivos. Sus condiciones eran peores, ni siquiera se les permitía bañarse sino cada una o dos semanas, con la misma braga y ropa interior por no tener ningún familiar que se las llevase; usaban cuando se les permitía, la pasta y cepillos de dientes que les dábamos. Igual sucedía con el papel higiénico. No tenían ningún tipo de utensilio de higiene y su aspecto y conducta, dadas las severas condiciones, era como en las películas de guerra, que no levantan la cabeza y caminan arrastrando los pies; un grado de sumisión extremo provocado por este tipo de tortura blanca brutal, yo nunca había vivido o visto algo así.

Los familiares los describen como si estuvieran en campos de concentración. Eso mejoró un poquito cuando llegó el coronel Hannover Esteban Guerrero Mijares, pero parece que ahora es implacable.

Un sargento, cuando nos traía la comida, que era extremadamente reducida. Por ejemplo, en la mañana una arepa pequeña y dos cucharadas de arvejas, a esos jóvenes llaneros, en vez de darles las cuatro, le daban dos. A diferencia de otras cárceles donde se permiten los alimentos, allí está prohibido. El confinamiento es absoluto, sin libros, sin teléfonos y lo único para ingerir que se puede recibir es agua.

– **Con la llegada del coronel Guerrero Mijares, empezaron a permitir que los familiares les llevaran alimentos, lo cual hizo que recuperaran algo de peso, pero volvieron a impedirlo. ¿Será que les gusta aplicar la tortura?**

– No lo sé, pero le comento algo. Después que salí en libertad, a los 45 días gracias a Dios, el ministro Padrino López me mandó a llamar a su despacho y personalmente me pidió disculpas y aceptó que yo tuviese diferencias de criterio de manera muy amable. Sin embargo, me preguntó si había visto su entrevista con José Vicente del domingo anterior, lo que significa que él creía que yo tenía TV en la cárcel. Lo que no sabía es que cuando me llamaron tenía tres días sin bañarme y en absoluto aislamiento, lo cual no pude decirle en esa reunión porque mi órgano de investigación designado era mi propio órgano de reclusión, es decir, mientras tuviese cautelares estaba en sus manos.

– **¿Cuándo les permitían llamar, tenían privacidad?**

– No, ¡qué va! Hacíamos una fila para llamar por teléfono y eran solo tres minutos desde que comienzas a marcar, caiga o no caiga la llamada. Cuando hacíamos la fila, no podíamos hablar entre nosotros. En ese famoso pasillo hay una celda de castigo de un poco más de un metro cuadrado cubierta, piso y paredes, de colchona podrida, donde el reo solo puede sentarse en el piso. La hediondez es tan grande que cuando usted pasa frente a esa celda el mal olor llega a la parte exterior; allí colocaban a los castigados, en ocasiones hasta dos. La celda no posee iluminación, es oscura 24 horas al día, y normalmente los colocan con capucha y esposados con las manos atrás; comían del plato como perros. Algunos tenían la flexibilidad de pasar los brazos por debajo de las piernas hacia adelante y así podían burlar un poco esta barbarie. Yo, ante el temor de ser castigado, trataba de practicar en la celda el paso de los brazos hacia adelante y nunca lo logré. Rogaba a Dios no caer allí, moriría, creo que no lo resistiría, se lo confieso.

– **¿Qué pasa ahí en las noches?**

– A las nueve de la noche apagan las luces de manera centralizada y la oscuridad, por ser un sótano, es absoluta. Usted abre y cierra los ojos y no hay diferencia. Así había que cuadrar muy bien la posición de la bolsa para necesidades, el pote para orinar, el papel, agua para beber, etcétera. En posiciones aprendidas, porque la luz

la volvían a colocar a la hora del desayuno. La cama era de concreto con una colchoneta encima. No hay sillas ni repisas ni nada adicional en la celda. Algunos compañeros, quienes de alguna manera tenían receta médica para ello, se mantenían allí a base de pastillas para dormir. Paradójicamente le puedo decir que le doy gracias a Dios por esa experiencia.

- Usted es un alto oficial, que hizo carrera durante décadas en la institución armada... ¿Qué fue lo que más le impactó de lo que vio en la DGCIM?

- Allí vi a jóvenes recién capturados de las protestas, normalmente los más importantes; los tenían semanas en el pasillo, manteniendo en su cabeza la capucha negra y esposados 24 horas al día, excepto para comer o higiene. Y le digo que sentía una gran admiración por esos jóvenes que no cedían a todo este cruel trato y presión. Por alguna extraña razón el coronel (Franco Quintero) solo a mí me permitió a la mitad de mi estadía (tal vez una concesión ordenada por algún superior que me conocía) llevar tres libros y mi esposa me llevó mis libros preferidos: La Biblia, el Conde de Montecristo y Don Quijote.

- ¿Puede describirme el área?

- El área es totalmente cerrada en el sótano con dos puertas para entrar al pasillo. Allí, un viejo aire acondicionado recoge el aire del baño y lo lleva a las celdas por ductos, en un eterno circuito cerrado sin tomas de aire del exterior. Puede imaginarse el efecto del aire viciado, combinado con los malos olores y tener que respirar así en una celda cerrada, incomunicado y sin poder hablar con nadie día a día. En algunas oportunidades nos daban permiso para salir al pasillo y podíamos hablar y de repente volvíamos

a la condición anterior. Estaba previsto, una vez a la semana, subírnos media hora a tomar sol, lo cual durante mis 45 días solo se hizo una vez. Las visitas son solo de dos personas que tienen que sentarse separadamente de las otras familias y no se puede hablar ni saludar entre familias.

- ¿Alguna razón para ello?

- No la dicen. Al terminar la visita éramos desnudados uno a uno en el baño, teniendo que flexionar las piernas en posición de cuchillas para verificar que no tenemos algo en el ano. Faltando unos 15 días para mi libertad que solo supe el día que salí cuando me mandaron a bañar, colocaron a un teniente en mi celda y para que usted tenga una idea, en oportunidades yo lo tenía que tranquilizar y decirle que respirara poco a poco por el efecto del aire viciado. El aislamiento para ellos es una forma adicional de tortura.

- ¿Por qué?

- Imagínese cómo será eso, que yo le decía a mi esposa que prefiero estar hacinado a solo, porque es terrible ver cómo pasan los días y usted sólo puede pensar o rezar.

- ¿Cómo fue su detención?

- Me detuvieron diciéndome en mi casa que era una entrevista. Y el trato no solo fue inhumano, sino que me metieron en una pequeña oficina de dos por dos con una silla rota, sin ventilación, cuatro lámparas potentes y pintada de marrón, paredes y techo. Ya allí comienza la tortura. Allí pasé desde las cinco de la tarde hasta la una de la mañana, sin comer, sin tomar agua y sin explicaciones. A la una de la madrugada, cuando llegó la orden de aprehensión, me pasaron a la celda, por supuesto sin agua y sin haber comido. Y aun así, puedo confesar que me considero afortunado.

- ¿Afortunado?

- Sí. Allí tenía dos meses un general, un palo de hombre, solo por ser amigo del general Baudel y siendo 10 años mayor que yo, bajo y de contextura delgada, había rebajado 20 kilos y no se le permitía de manera humanitaria que su familia le llevase algún suplemento. Esas personas me dieron la fuerza para resistir y en la soledad de la celda, rezar. No me imagino a alguien que no crea en Dios, sobrevivir en un sitio así. Para que algunos compañeros se distrajeran les escribía en papel fragmentos de la Biblia de los que levantan la moral y se los pasaba, cuando podía, por debajo de la puerta.

- Sé que no hay la mínima consideración para la atención médica. Quedó demostrado con el caso de Nelson Martínez, ministro y presidente de Pdvsa

- No se pueden tener pastillas ni medicina en la celda. Si le duele la cabeza o ante cualquier otro problema, solo tendrá la medicina si se lo permite el custodio de guardia y se toman de sus pertenencias que son guardadas en otro



ROMÁN CAMACHO

lugar. Al cerrar las celdas en la noche no entra nadie hasta el otro día, no hay manera de ser atendido en caso de cualquier emergencia, incendio u otra cosa.

– **¿Cómo eran los custodios?**

– La mayoría son formados en Cuba, de acuerdo a sus propios comentarios. Cuando abren la puerta para dar de comer, no la abren totalmente, solo lo suficiente para pasarle el contenedor de plástico con la comida, mientras un funcionario lo graba con una cámara como para dejar constancia que comió. Ahí se come con cubiertos plásticos que limpiamos con servilleta al terminar y los colocamos de nuevo en una bolsita con nuestro nombre. Cuando se les olvidaba los cubiertos, en vez de regresar los 20 metros donde se depositan, simplemente nos ponían a comer con las manos. Cuando cierran la puerta, que posee dos grandes bisagras, lo hacen con fuerza. Yo no entendía por qué y después entendí que, hasta esa insignificancia, formaba parte de toda esta tortura blanca.

– **¿Usted lo sentía así?**

– Sí, es brutal el efecto psicológico de ver cerrar de nuevo la puerta hasta la próxima comida, o hasta el día siguiente con un fuerte golpe. No saber si es de día o de noche, no saber qué hora es, ya que no permiten relojes; escuchar solo el ruido del aire que a veces se apagaba y el sofocamiento aumentaba. No soy vengativo, pero de verdad le digo que estas personas han hecho mucho mal.

* Periodista.

Fuente: *Infobae*.

Comunicado público:

La tortura está diseñada con el propósito deliberado de atemorizar a todos bajo la lógica de demostrar una fuerza de dominación colectiva

Vía @COFAVIC

“Caracas, 1 de julio de 2019

Cofavic manifiesta su profunda preocupación por el caso del Capitán de Corbeta Rafael Ramón Acosta Arévalo, quien falleció el pasado 29 de junio, teniendo como lugar de detención las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). El Capitán Acosta, según sus abogados, fue detenido arbitrariamente por las autoridades venezolanas el pasado 21 de junio de 2019 en Guatire, Estado Miranda, y fue mantenido bajo presunta desaparición forzada durante 7 días en los cuales ni sus familiares, ni sus abogados tuvieron acceso a verlo y confirmar su estado de salud. Según versión de sus abogados, el Capitán Acosta presentó *“signos de tortura cuando fue trasladado a los Tribunales”*. Asimismo, mediante comunicado público de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se expuso que *“El día viernes 28 de junio del 2019 fue presentado ante el Juez Penal Militar... y antes de iniciar, la respectiva audiencia de presentación se desmayó”*.

Lamentablemente este es un nuevo caso que demuestra las graves violaciones a los derechos humanos y la ausencia de garantías judiciales mínimas que sufren las personas detenidas en Venezuela, configurándose un patrón de actuación generalizado que goza de impunidad.”

Nota: La versión completa del Comunicado está disponible en el siguiente enlace: <http://www.cofavic.org/wp-content/uploads/2019/07/COFAVIC-comunicado-caso-Capitan-Rafael-Acosta-Arevalo.-Version-final.pdf>

Rafael Acosta Arévalo

Víctima venezolana del castrochavismo

Pedro Corzo*

La muerte del capitán de corbeta colocó nuevamente a relieve el clima de miedo impuesto por el régimen, donde la tortura de presos políticos se ha vuelto una práctica común y las muertes bajo custodia son un hecho recurrente

Es justo recordar que, en muchos de los actos celebrados en el presidio político cubano, también en el exilio, se hace un pase de lista de algunos de los caídos en la lucha, llamado que los asistentes responden con un firme “presente”. Por esta razón evocamos de igual manera a la más reciente víctima venezolana del castrochavismo, el torturado y asesinado capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Presente.

Es una honra para todos que la reacción al asesinato de Acosta Arévalo no se haya hecho esperar. El repudio internacional ha sido rotundo y es de suponer que los crímenes de Nicolás Maduro no queden impunes, y los gobiernos comprometidos con la democracia y respeto a la dignidad humana actúen en consecuencia.

El régimen castrochavista está derivando hacia una mayor criminalidad. Es evidente que su política de tolerancia cero a la oposición está en alza, que no basta con la judicialización de los críticos, como testimonia el asesinato del oficial Acosta, precedido, entre otros, por la oscura muerte del concejal de Caracas, Fernando Albán, en 2018.

Todos los tiranos, Maduro es uno de ellos, gustan acumular víctimas. Son dados a llenar las cárceles y asesinar a las personas que disientan de sus propuestas, o que les disputan el poder. No obstante, hay que reconocer que estos delincuentes ejecutan sus crímenes con diferentes modales, aunque compiten en la crueldad extrema con la que lo realizan.

Hay asesinos como los hermanos Castro y Ernesto “Che” Guevara que ensamblaron en Cuba una caricatura de legalidad para ejecutar a sus martirizados, lo que no significa que los victimarios del castrismo sean remisos al asesinato vulgar o a la tortura física, de eso y mucho más han padecido los cubanos en estos sesenta años.

El totalitarismo insular, aunque celebraba juicios con sentencias previamente dictadas o fusilaba y después juzgaba, la mayoría de las veces ha procurado que sus espurios tribunales simulen un proceso judicial. Si bien nunca respetaron el debido proceso, como han testimoniado miles de personas a través de los años.

El castrismo instrumentó su legalidad y sus tribunales revolucionarios para darle al proceso de victimización en la isla una apariencia de derecho que nunca ha existido. Esos falsos procesos judiciales han sido la base para que numerosos académicos, políticos y dirigentes sociales, dispuestos a ser engañados continúen convencidos de que en Cuba se hace justicia y sigan aceptando como legítima la expresión guevarista de “Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte”.

Por su parte, el régimen de Nicolás Maduro, sin ser menos sangriento que su par cubano, tiene prácticas criminales diferentes que propician el escándalo y la denuncia internacional.

Los esbirros venezolanos sin duda alguna han hecho gala de una mayor torpeza que sus pares castristas, a quienes nunca se les hubiera ocurrido conducir hasta un juez, por partidario que este fuera del régimen, a un preso brutalmente golpeado y al borde de la muerte, un suceso que debe estrechar el cerco democrático a la dictadura sudamericana y a su aliada cubana.

La asesoría de funcionarios, militares y agentes represivos del castrismo en las gestiones del régimen de Nicolás Maduro es innegable, como también lo son las indicaciones de los esbirros cubanos en la violación de los derechos humanos de ciudadanos nicaragüenses y venezolanos. El gobierno castrista ha transformado a Cuba en un alto centro de estudios del crimen político y la represión policial, en consecuencia, es culpable de las violaciones de sus discípulos.

Es tiempo más que suficiente de que una concertación de países ayude al pueblo venezolano a romper las cadenas que lo oprimen. El castrochavismo no va a cambiar, su conducta más que sus palabras son iguales a las que profiriera Guevara en Naciones Unidas en 1964. Maduro diría, como su igual Guevara: «Estamos torturando y seguiremos matando, mientras sea necesario».

*Conferencista y escritor.

Fuente: *Infobae*.



EFE-

Visita del Alto Comisionado
a Venezuela

¿La vía más corta para llegar a la CPI?

Rafael Uzcátegui*

La historia contemporánea de Venezuela registra un suceso inédito: la visita oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Materializada el pasado mes de junio, es un hecho que, por sí mismo, refleja las discrepancias de una sociedad que clama justicia

En una breve pero intensa visita Michelle Bachelet, en su rol como alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, estuvo en Venezuela del 19 al 21 de junio de 2019. Su presencia, por sí sola, significaba una victoria para quienes clamaban la presencia en el país de observadores independientes y calificados para constatar la situación de los derechos humanos. El último funcionario de esta envergadura aterrizó en Maiquetía en el año 2002, cuando el por entonces secretario general de la OEA, César Gaviria, visitó Caracas luego de los sucesos de abril de 2002.

Sin embargo, lo que era una conquista de la presión de diferentes sectores democráticos tuvo lecturas disímiles y negativas, no solo por funcionarios con responsabilidad —por acción y omisión— en la violación de derechos humanos, lo que era de esperarse. También por quienes valoraban la presencia como una supuesta legitimación del polémico segundo período presidencial de Nicolás Maduro. ¿Qué podemos esperar de la actuación de los organismos internacionales, especialmente el que ahora dirige la señora Bachelet, para la mejora de las condiciones concretas de la vida de los venezolanos?

¿INVITADA DE MADURO?

El 27 de septiembre de 2018, durante una reunión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se aprobó una resolución sobre Venezuela con 23 votos a favor, en la que se exigía al Gobierno que abriera sus puertas a la asistencia humanitaria, expresando a su vez preocupación por lo que se calificó como “graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de una crisis política, económica, social y humanitaria”. En el texto se solicitaba la colaboración con la Oficina de Derechos Humanos y el resto de los mecanismos del Consejo. Finalmente, se estableció como mandato a la Oficina del Alto Comisionado para los DD.HH. de la ONU la elaboración de un nuevo informe sobre la situación de derechos humanos en el país, el cual sería presentado ante el Consejo, a mediados de 2019, previo a una actualización de forma oral en la sesión correspondiente a marzo de ese mismo año.

Tras esta resolución la alta comisionada para la ONU de los DD.HH., Michelle Bachelet, pidió a las autoridades venezolanas que dejaran entrar al país a los investigadores de su equipo técnico,

a fin de poder recabar la información necesaria. En una entrevista con *Noticias ONU*, Bachelet explicó que cuando se reunió con el canciller venezolano, Jorge Arreaza, le hizo la solicitud de “acceso al país” y le explicó que su oficina, con o sin resolución, tenía la obligación de monitorear y hacer un reporte sobre la situación de los derechos humanos. Fue luego de esta petición que Nicolás Maduro permitiría su visita al país.

Bachelet llegó a Venezuela el miércoles 19 de junio para una visita de tres días al país. El jueves 20, en horas de la tarde, se reunió tanto con organizaciones de derechos humanos como con diferentes grupos de víctimas. En el espacio de una hora, veintiséis voceros tomaron la palabra para hacerle peticiones a la alta comisionada. Luego escuchó, con signos claros de empatía e interés, los testimonios de familiares de personas asesinadas por los cuerpos de seguridad y de presos políticos. “Además de medidas económicas y sociales, deben tomarse decisiones políticas para mejorar la situación”, reconocía la funcionaria. Seguidamente afirmaba, en el encuentro con los activistas, que su presencia tenía como objetivo lograr resultados en la mejora de algunas situaciones concretas. “Tengo algunas buenas noticias, no todas las que quisiera”, expresó cuando detalló el acuerdo de trabajo acordado verbalmente con las autoridades.

Además de la presencia de dos oficiales del Alto Comisionado de manera permanente en el país, con el objetivo de evaluar la ampliación del equipo técnico en seis meses y, eventualmente, la apertura de una oficina formal del ente en Caracas, apuntó el acceso a cárceles y presos políticos sin restricción, la visita de relatores independientes de Naciones Unidas, la realización de una evaluación del sistema de administración de justicia y la asesoría en la implementación de políticas públicas con impacto en derechos humanos.

¿MADURO HONRARÁ LOS COMPROMISOS?

Para valorar si hay la voluntad política suficiente para cumplir con estos acuerdos, tenemos que entender cuál es la lógica costo-beneficio para un gobierno de reiterada vocación no democrática, en permitir la visita del ente internacional más prestigioso en materia de derechos humanos. Según el razonamiento en que la afinidad ideológica puede colocarse por encima de los propios valores, Maduro continúa observando a Bachelet como lo que fue, militante del Partido Socialista de Chile y no como lo que es en la actualidad, rectora de una institución cuya fidelidad está en los valores universales y de no discriminación propios de los derechos humanos. Además de la fotografía Bachelet-Maduro,



REUTERS

el segundo objetivo sería fortalecer la narrativa oficial –que adjudica a las sanciones internacionales el origen de la crisis económica y social de los venezolanos– con cualquier opinión citable sobre el tema emitida por el Alto Comisionado, cuyo momento estelar será la presentación del tercer informe especial sobre Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos que ocurrió a comienzos del mes de julio.

Acá debemos aclarar que una opinión generalizada dentro del movimiento mundial de derechos humanos es rechazar cualquier medida de presión que impacte negativamente en los derechos humanos de la población. Por lo tanto, es previsible que, de manera pública o privada, Michelle Bachelet solicite el retiro de este tipo de sanciones contra Venezuela. Aunque esto signifique el 5 % del contenido del tercer informe, Maduro está dispuesto a pagar el costo del 95 % restante, que ratificará la grave situación de la dignidad humana entre nosotros, la sistematicidad del abuso de poder y la indefensión del ciudadano frente a ellos. La estrategia del Alto Comisionado, entendiendo la lógica oficial, era lograr con las autoridades que controlan territorio un acuerdo de trabajo previo a la divulgación del informe, un compromiso verbal al momento de redactar este artículo sin formalización por escrito.

El asesinato por tortura del capitán de corbeta Rafael Acosta dinamitaba, desde las primeras horas, las capacidades de incidencia de los oficiales del Alto Comisionado sobre la realidad venezolana. La constatación de la escasa voluntad de Miraflores en mejorar la situación de los derechos humanos y traicionar la palabra empeñada, pudiera transformar el valor simbólico de Bachelet, que Maduro creía poder manipular a su favor, en un nuevo elemento capaz de erosionar su endeble legitimidad internacional. Por otra parte, la presencia de dos oficiales de su

oficina en el país permite que un abanico amplio de personas pueda ofrecer su testimonio sin intermediarios. En un contexto de ausencia de instituciones y orfandad de mecanismos internos de protección, esta posibilidad, por sí misma, es un mecanismo de reparación para víctimas y sus familiares. Sin embargo, este efecto terapéutico es limitado si los oficiales no tienen la capacidad de cumplir con el mandato que les ha sido encomendado, que incluye la visita a centros de detención y entrevistas confidenciales con presos políticos.

HACIA UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

La presencia de oficiales del Alto Comisionado en el país, como fue acordado durante la visita de Bachelet a Caracas, no es el único mecanismo que esta institución puede implementar para abordar la situación venezolana. De manera complementaria, o como consecuencia de la ineficacia de los esfuerzos por instalar una oficina permanente en el país, una estrategia que han venido impulsando las ONG de derechos humanos es la conformación de una Comisión de Investigación sobre Venezuela por mandato de Naciones Unidas. El Alto Comisionado tiene la posibilidad de solicitar al secretario general de la ONU la selección y nombramiento de sus miembros con calificaciones suficientes y reconocidas en la materia, en una cifra impar de tres o cinco para facilitar la toma de decisiones. Los integrantes de una Comisión de Investigación deben ser independientes e imparciales, con experiencia internacional considerable en derechos humanos; de integridad personal reconocida y reputación moral intachable; con conocimiento del país, la situación y la región, entre otros requisitos.

No existe un modelo único para la conformación de las Comisiones de Investigación, que pueden abordar casos concretos o situaciones generales en derechos humanos. Se calcula que desde 1992 el Alto Comisionado ha constituido unas cincuenta comisiones y misiones en situaciones complejas y apremiantes: caso Georgia (1993), Burundi (1995), Timor Oriental (1999), Darfur (2004), Timor-Leste (2006) y Costa de Marfil (2011). No obstante, sus cometidos se han agrupado en cuatro grandes objetivos: 1) la determinación de los hechos; 2) la evaluación de esos hechos a la luz de la normativa aplicable; 3) la obtención de conclusiones y, donde proceda, sobre los presuntos autores y 4) la formulación de recomendaciones.

En su manual sobre las Comisiones de Investigación, el Alto Comisionado afirma:

La colaboración con un Estado puede resultar difícil cuando el gobierno en cuestión no consiente o no está de acuerdo con la creación de

una comisión/misión. Básicamente, el consentimiento permitirá que la comisión/misión tenga acceso a las personas, los lugares y la documentación necesarios para llevar a cabo la investigación.

Sin embargo, aclaran que la falta de colaboración gubernamental no impide la realización de las labores de investigación y determinación de los hechos, ni pueden evitar que se alcancen las conclusiones pertinentes. Tanto que, recordando lo realizado sobre el Conflicto de Gaza (2009), utilizaron el recurso de viajar a países aledaños para entrevistar a personas que pudieran tener información de primera mano sobre los sucesos objeto de la investigación, invitar a testigos y víctimas a prestar testimonio fuera de sus países y apoyarse más en declaraciones oficiales y materiales de dominio público, así como en contactos informales con personas cuyas declaraciones reflejaban las posiciones oficiales.

Los resultados de una Comisión de Investigación sobre Venezuela, ordenada por el Alto Comisionado, pudiera significar un elemento decisivo en la apertura formal de un caso contra el país por parte de la Corte Penal Internacional. Además, sus revelaciones harían retroceder, aún más, a quienes continúan defendiendo la permanencia de un gobierno autoritario y no democrático, aumentando la presión diplomática en aras de una resolución pacífica, política y concertada de la crisis.

*Sociólogo. Coordinador general de Provea.

Venezuela

Reflexiones sobre el cambio en el poder

Juan Salvador Pérez*



POLITIKA UCAB

Las circunstancias venezolanas demandan un cambio, uno que abarque todos los sectores de la sociedad dado el nivel de precariedad que se presenta. Ha de ser un cambio de forma que en el fondo también genere resultados. La urgencia es tal que cuesta diferenciarla de lo importante, pero menester aquí es hacer la diferenciación porque lo urgente es siempre urgente y lo importante es siempre importante, sea cual sea el gobernante

asta con tan solo ver las encuestas nacionales o con escuchar a la gente en la calle para evidenciar que la gran mayoría de los venezolanos pide un cambio, es decir, que las cosas cambien. Pero ese clamor atiende realmente a qué, ¿a un cambio de quienes ejercen el poder? ¿o a un cambio en la manera misma de cómo se entienden el ejercicio del poder?

Lo primero resulta obvio, si el gobernante no sirve, si lo ha hecho mal, ya sea porque no sabe, no puede, o no quiere, debería salir de sus funciones, dejar su cargo y dar la oportunidad a otros.

Pero esta *obviedad* deja de ser tan obvia cuando nos hacemos la segunda pregunta. Es entonces cuando entramos en la concepción propia del ejercicio del poder.

El “quién” es importante. El “cómo” también.

COMPRENDER LAS CIRCUNSTANCIAS

Cuando en 1993 se supo la noticia de que el popular líder sudafricano Chris Hani había sido asesinado de dos disparos por hombres blancos de extrema derecha, solo cabía esperar que la violencia se desatara en todos los rincones de Sudáfrica. Las protestas llenas de rabia se daban en los guetos de la población negra y cada vez se hacían más sangrientas, más llenas de ira y de frustración.

Sin duda alguna, aquel terrible incidente principalmente buscaba acabar con todo el proceso de negociación hacia una transición pacífica y democrática, en el cual poco a poco se iba avanzando.

El miedo —ese sentimiento que siempre precede a la violencia— se había apoderado de todos en Sudáfrica. En la población blanca temían la furia de los negros hastiados de tantos años de maltrato. En la población negra, esperaban la reacción brutal y represiva de la policía y las fuerzas de orden público. En el gobierno veían inevitable la explosión de un peligroso conflicto civil, pero en aquel momento tan complicado

una persona, un hombre, supo leer bien las circunstancias: Nelson Mandela.

Mandela decidió asumir su papel histórico y como cabeza de la oposición, se dirigió en una alocución a toda Sudáfrica. Estaba él completamente claro de lo que se jugaba.

Cuenta el periodista John Carlin, que al llegar al recinto y colocarse frente al atril donde daría su discurso, Mandela encontró un papel que alguien le había dejado allí con un mensaje corto y preciso: “Nada de paz. No nos hable de paz. Ya hemos tenido bastante, señor Mandela. Nada de paz. Denos armas, no paz”.

Todo parecía ser odio, rabia, indignación, pero necesariamente había que superar aquellas reacciones primarias para poder retomar y continuar por el camino de la transición. Mandela tenía que apaciguar y convencer a su gente de no incurrir en la tentación de la violencia. Mandela, pese a aquella advertencia anónima, comienza su discurso así:

Esta noche me dirijo a todos y a cada uno de los surafricanos, negros y blancos, desde lo más profundo de mi corazón.

Un hombre blanco, lleno de prejuicios y odio, vino a nuestro país y cometió un acto tan execrable que toda la Nación se balancea al borde del desastre.

Una mujer blanca, de origen afrikáner, arriesgó su vida para que pudiéramos conocer y llevar ante la justicia al asesino [...]

Ha llegado el momento de que todos los surafricanos se yergan codo con codo contra los que, desde cualquier bando, desean destruir aquello por lo que Chris Hani dio su vida: la libertad de todos nosotros.

El auditorio presente, incluso el autor anónimo de aquella nota dejada sobre el atril, y toda Sudáfrica entendieron. Su discurso fue inclusivo, habló de blancos y de negros por igual, de libertad para todos, allí no hizo diferencias, llamó a la calma, a la sensatez, a la reconciliación y al perdón, pues lo otro solo habría conducido al país a una guerra. Esa fue la comprensión correcta de las circunstancias. Mandela sería electo presidente apenas unos meses después de aquel discurso, en 1994.

EL PODER COMPRENDIDO DESDE LAS CIRCUNSTANCIAS VENEZOLANAS

Hoy nuestro país atraviesa, acaso, la peor crisis de su historia republicana. De eso nadie tiene duda. La precariedad de la situación es tremenda y abarca todos los aspectos de la vida nacional.

La urgencia es tal que cuesta diferenciarla de lo importante, pero es menester hacer la diferenciación porque lo urgente es siempre urgente y lo importante es siempre importante.



REUTERS

Urgente es garantizar las condiciones básicas de vida, atender las necesidades de la gente, el respeto a los derechos humanos, las garantías mínimas que permitan vivir dignamente a todos los ciudadanos. Urgente es hacer que el gobierno cambie, bien sea porque decidan hacerlo bien, o porque ante su incapacidad dejen el espacio a otros que sepan hacerlo bien. Urgente también es cambiar la concepción del ejercicio del poder. Esto último, nos lleva entonces a abordar lo importante. Pretender cambiar la concepción del ejercicio del poder supone cinco circunstancias que comprender y cinco actitudes que asumir.

Vayamos por partes.

En cuanto a las circunstancias:

1. Somos un país en el exilio. Eso no necesariamente es algo malo, pero sí es una realidad que debemos entender. Que cerca de 5 millones de venezolanos hayan decidido dejar el país tiene claramente una lectura preocupante y desoladora, pero también puede ser entendido como una situación de la cual se pueden obtener ventajas culturales, sociales y económicas. Han sido muchos los países que han atravesado grandes éxodos y migraciones poblacionales y que con profundidad en el análisis, políticas públicas adecuadas y medidas inteligentes han logrado convertir esa circunstancia en una oportunidad.
2. ¿Seguimos siendo un país petrolero? El dramático declive en la producción, los bajos niveles de exportación, la pésima situación general de todo el sector de hidrocarburos y los tiempos y condiciones que la recuperación de este sector supone, nos conducen a plantearnos como país si vamos a seguir, o pretender seguir, siendo un país dependiente del petróleo o si aprovechamos esta histórica oportunidad para el desarrollo de una economía diversa.



AFP / FEDERICO PARRA

3. La promoción de una ética del trabajo. Venezuela se ha convertido en un país donde la gente no trabaja, y aunque en los últimos años esto se ha hecho más grave, no es un mal nuevo. Desde el auge petrolero de principios de los años 70 del siglo pasado, se fue fomentando una “mentalidad” de fácil acceso a la riqueza, rentismo, clientelismo, populismo... Hoy urge rescatar la cultura del trabajo o, para ser más precisos, una “ética del trabajo” como elemento esencial para el correcto desarrollo de la sociedad y de la persona.
4. El fomento de la cultura de la austeridad. Nos hemos siempre definido, o autodefinido, como un pueblo solidario y abierto a los otros, a las necesidades de los otros. Esa, sin duda, es una característica positiva, pero lo es aún más si se entiende y se practica desde una cultura de la austeridad, no basada en el consumo exagerado ni en la cultura del desecho. Estos tiempos de estrechez y dura situación económica bien entendida, permitirían asumir la austeridad como una virtud y no como una pena. Sobre todo, si es desde el ejemplo de los gobernantes y los poderosos.
5. El reto de la reconciliación nacional. Quizás sea esta –en mi opinión– la más importante de las circunstancias a comprender por aquellos que asuman el cambio del poder en Venezuela. Tanto el reconocimiento y la reconciliación nacional se han querido entender como un punto de partida, pero lo cierto es que son un punto de llegada. Es mucho lo que debemos trabajar, esforzarnos, sacrificarnos y, especialmente, perdonarnos para poder lograrlo. La paz es posible pero exigente, la experiencia de Mandela en Sudáfrica así lo demuestra, pero nuestro pasado no tan lejano también. Venezuela supo después de 1958 cómo llevar un país en paz social, tanto así que será en 1964, por primera vez en la historia republicana, que Rómulo Betancourt, presidente elegido

en votaciones universales, directas y secretas, le entregue el poder a su sucesor Raúl Leoni, elegido también democráticamente. Pero más significativo y más importante fue cuando en 1968 Rafael Caldera, candidato de oposición, gana las elecciones por una muy mínima diferencia de votos y el gobierno del doctor Leoni y su partido, respetando el principio de alternabilidad, acatará y respetará el veredicto popular y entregará el poder pacífica y civilizadamente, naciendo así verdaderamente la democracia en Venezuela.

Es de destacar que la reconciliación nacional, si bien al inicio se trata de un acuerdo entre actores políticos, no solo se limita a ellos. Por el contrario, es un asunto que incumbe a todos los venezolanos, porque afecta o beneficia a todos por igual.

Volviendo a nuestro ejemplo histórico de los primeros años de la democracia, aquel ambiente de reencuentro y reconciliación nacional fue posible porque junto a los actores políticos, estaba un sector empresarial comprometido con el desarrollo del país, convencido y dispuesto a generar oportunidades para todos; una Fuerza Armada consciente de su función y respetuosa de la legalidad; una ciudadanía animada y ganada a la idea de convertirse en una sociedad digna y dignificante... En fin, un país completo que se reconocía como tal y se sumaba a la construcción activa de un mismo proyecto democrático.

Por su parte, en cuanto a las cinco actitudes a ser asumidas, el papa Francisco marca la pauta y nos las indica de manera diáfana y útil:

1. Entender la política como *Caridad*, es decir, como un supremo, elevado, pero concretísimo acto de amor.
2. Hacer *Caridad* sin propaganda, ni proselitismo, sin violencia y sin egoísmo.
3. Con disposición a ensuciarse las manos, sin miedo al trabajo duro y sacrificado.
4. Sin ser *insignificantes*, es decir, sin miedo a ser “sal que sale y luz que ilumine”.
5. En constante práctica del diálogo y de la fraternidad humana, que abraza a todos y que no excluye a nadie.

Vivimos hoy tiempos difíciles, nadie puede negarlo. Vivimos, sin duda alguna, tiempos de *crisis*, más que nunca entendida en su sentido etimológico como separación, distinción, elección, discernimiento, como *cambio*. Es decir, vivimos tiempos de cambio.

Los cambios llegan, la historia así lo demuestra, y por ello dedicamos estas breves reflexiones enfocadas al “cómo” asumir los tiempos de cambio, para que verdaderamente lo sean.

*Magister en Estudios Políticos y de Gobierno.

Propuesta en tiempos de crisis e hiperinflación

Cómo relanzar el aparato productivo venezolano

Juan Francisco Mejía Betancourt*



EPA / MIGUEL GUTIÉRREZ

Desde hace varios años el sector productivo venezolano ha venido trabajando para identificar e integrar las restricciones y propuestas que influyen en su normal funcionamiento. Fedecámaras se propuso desarrollar un trabajo que permitiera tener una radiografía lo más clara posible: es momento de crear consensos y alinear posiciones

Comencemos por decir que la falta de información es enorme. Desde el año 2007 ha sido muy difícil obtener información de calidad y con la precisión necesaria para poder construir una radiografía confiable, que permita evaluar el peso y las condiciones del sector privado en la economía venezolana. Eso ha dificultado mucho la posibilidad de hacer una evaluación y un análisis de su comportamiento que habilite la posibilidad de hacer propuestas de políticas públicas para la toma de decisiones, y construir escenarios futuros en el ámbito de la economía nacional e internacional. Solo hasta este año 2019 hemos podido recibir algunas cifras oficiales que lo que hacen es reconocer la gravedad de la situación actual.

Al mismo tiempo, por esa misma falta de información y de su consecuente evaluación, se

ha dificultado en gran medida el análisis de las restricciones a que ha estado sometido el sector productivo privado en las últimas dos décadas, enmarcado en una dinámica política, económica y social de gran complejidad, situación que ha impactado de forma muy negativa en el desenvolvimiento del mismo y de sus instituciones más representativas.

El desarrollo de propuestas ha sido otro eslabón de creciente preocupación. Lograr articular un conjunto de propuestas, que en el caso de este trabajo estén orientadas fundamentalmente al corto plazo, tomando como tal el horizonte temporal de dos o tres años, ha sido una tarea siempre difícil por la amplitud de las mismas y el laberinto que envuelve la situación económica, política y social venezolana.

Este trabajo promovido por Fedecámaras busca identificar y radiografiar al sector productivo venezolano, en nueve de sus principales sectores: agricultura; alimentación; ganadería y pesca; minería; industria; construcción; turismo; telecomunicaciones y comercio y servicios, procurando no solo los mejores y más completos datos, ya sean estos oficiales o producto de la investigación propia de los sectores, sino la identificación de las principales y prioritarias trabas y restricciones que se han venido desarrollando en los últimos años. Asumimos que solo comprendiéndolas adecuadamente podrán tener posibilidad de solución en el corto y mediano plazo.

Un aspecto a destacar es que en este trabajo no se incluye el sector petrolero, ni público ni privado. Varios trabajos se han hecho sobre este sector en los últimos meses. La integración y sinergia de la industria petrolera con las cadenas de valor del resto de los sectores productivos es central, por no decir primordial.

El trabajo refleja el enorme deterioro del sector privado en todos sus sectores, tras más de cinco años consecutivos de contracción y una caída acumulada que superó el 40 % en 2018. Al mismo tiempo, por contraste, la economía de nuestros principales competidores y del entorno geográfico es positiva. Los principales países de la región, según el mismo informe de Cepal, tienen varios años de crecimiento. En el año 2019, las previsiones son que la región crecerá en torno al 2 % mientras nuestro país tendrá una caída del -8 %; esto implica veinticuatro trimestres seguidos de caída de la economía, un ejemplo solo visto en países como Liberia, Yemen o Ruanda.

El análisis detallado de cada sector indica que existe un conjunto de restricciones y propuestas que transversalmente los afectan a todos: regulaciones y controles en los eslabones de las cadenas productivas, inseguridad jurídica generalizada sobre bienes y personas, intervencionismo en materia laboral, deterioro progresivo de la infraestructura, especialmente en el ámbito eléc-

trico, e inestabilidad de las principales variables macroeconómicas.

El impacto del *sector agrícola-ganadero-alimenticio-pesca* sobre la población, en materia de abastecimiento de alimentos, es especialmente delicado. En este ámbito la excesiva burocracia y la estatización de toda la cadena, sumada al control de todos los eslabones y la excesiva presencia en el manejo de las instituciones por parte del sector militar, son un factor determinante a la hora de analizarle.

Caso especial es el *sector minero* donde, con consideraciones parecidas al anterior, confluyen además los efectos preocupantes de fuerzas paramilitares y mafias organizadas en el control de la producción por una parte y, por otra, la total ineficiencia en el manejo de las principales empresas del sector de Guayana.

El *sector de la construcción* recibe los efectos del deterioro del sector siderometalúrgico, al mismo tiempo que de la caída total de la inversión pública en infraestructura de todo tipo: vial, educacional, eléctrico, inmobiliario...

El *sector industrial* ha estado sometido a un cerco total de toda su actividad productiva que ha generado un cierre del 70 % en el número de empresas existentes para principios de la década pasada. La industria venezolana ha sido destrozada y arrasada. El sector industrial se encuentra en postración, no hay un solo indicador que muestre algo positivo en los últimos años. Nos hemos quedado atrás en inversión, internacionalización, innovación, generación de encadenamientos productivos. No hay ejemplo en los últimos veinte años de algún país en el mundo que deliberadamente destruya su industria nacional.

Necesitamos una política industrial –en todo el sentido histórico de la palabra–, una política industrial venezolana, acoplada a la realidad actual del país e inteligente, que permita la conexión e integración efectiva a la nueva revolución industrial 4.0, señalada como cuarta revolución industrial.

Los *sectores del turismo, telecomunicaciones y comercio* no escapan, como sectores terciarios, a todo lo antes señalado. Se han visto afectados por todo tipo de regulaciones, fiscalizaciones, controles, imposibilidad de acceso a divisas, infraestructura deteriorada y, en general, por una ausencia total de la seguridad jurídica mínima para operar.

Para complementar este análisis de restricciones y propuestas, se acordaron un conjunto de premisas que forman parte de la *visión con la cual el sector productivo venezolano quiere encargar su compromiso con Venezuela*: queremos un sector productivo próspero y generador de bienestar y oportunidades, competitivo e innovador, orientado en su acción con la ética, integrado con nuestros trabajadores, que sea factor determinante en el diseño de políticas públicas,

independiente del Estado, promotor de buenas prácticas empresariales y de la inversión productiva y, especialmente, comprometido con la inclusión social.

Venezuela, tal como se lo plantean otras economías de la región, debe poner en práctica *políticas para la creación de nuevos sectores o la modernización de sectores maduros*, respetando las restricciones dadas por su tamaño, el grado de desarrollo y la estructura productiva de su economía. La diversificación de la estructura productiva, mejorando la mezcla de productos y la especialización internacional, es un determinante del cierre de la brecha de productividad respecto a la frontera tecnológica internacional y, por lo tanto, de la aceleración del crecimiento de esa productividad agregada.

Por mucho tiempo se ha desarrollado un debate sobre varios temas: proteccionismo versus apertura, políticas de promoción de sectores versus políticas de carácter transversal; lo cierto es que a estas alturas del desenvolvimiento económico mundial, el debate se torna estéril; cuando lo antepone al interés superior del desarrollo nacional, poco importa este debate porque en cada caso que analicemos de países que están creciendo, observaremos cómo su crecimiento y en particular el desarrollo industrial, tiene como base principal la prioridad por el desarrollo endógeno.

SE ACABÓ LA RENTA PETROLERA

Ya no podremos contar con ella como en las décadas precedentes, debemos olvidarnos de lo que ha significado esa renta, mal usada, despilfarrada, saqueada y convertirnos en un país que use sus potenciales ingresos excedentarios para el desarrollo de los activos productivos y de desarrollo de la nación: escuelas, hospitales, infraestructura urbana y vial, servicios básicos. Este punto debe ser parte central de un acuerdo nacional para el desarrollo y crecimiento de la economía.

UN DETERIORO MORAL Y ÉTICO DE GRANDES DIMENSIONES

Partimos de esta premisa tanto en el ámbito gubernamental, como en un sector del empresariado que ha convivido y ha sido cómplice de todo tipo de corrupción y falta de principios. Esta situación se debe encarar desde un punto de vista de un capítulo importante a resolver; no obstante, se puede afirmar y así lo corroboran los principales estudios de opinión especializados: la empresa privada ocupa muy altos índices de aprobación y de opinión positiva frente a las mayorías del país.

Venezuela necesita reconstruir su sector privado para que esté cada vez más basado en la

calidad de su talento humano, en su capacidad para generar valor, con una fuerza de trabajo calificada, con un tejido productivo integrado por empresas competitivas e internacionalizadas, con universidades y centros de tecnología e innovación de clase mundial y un marco institucional que incentive la construcción de un Estado de libertad y bienestar sostenible. Para ello se debe apelar al uso racional de sus recursos naturales, potenciando sus ventajas comparativas y construyendo ventajas competitivas. El reto se encuentra entonces en saber combinar esas ventajas declaradas con el conocimiento, la tecnología y la innovación.

LA VENEZUELA POSIBLE ES TAREA DE TODOS

Este trabajo se une al conjunto de esfuerzos relacionados que han venido haciendo expertos e instituciones dentro y fuera de Venezuela. Propuestas y planes en materia de salud, macroeconomía, servicios públicos, seguridad, petróleo, infraestructura o educación, constituyen una ruta clave para iniciar un proceso de recuperación en el corto plazo. Estamos convencidos que, alrededor de un amplio consenso nacional, el país puede crecer sorprendentemente.

No podemos dejar de referirnos al importante papel que jugará la diáspora venezolana, tanto de personas como empresas, que han estado cultivándose y trabajando en centros de excelencia en todo el mundo. Su contribución para disminuir la brecha tecnológica y de innovación será importante.

La motivación fundamental de visualizar un país distinto en el futuro, ha permitido poner a trabajar a muy variados actores en una misma dirección. *Es momento de consensos y de alinear posiciones*. Esperamos que esta motivación no se detenga y permita seguir en este camino que, en definitiva, desnuda al sector productivo venezolano y lo muestra en su actual realidad, pero que al mismo tiempo anima al trabajo conjunto entre sector público y sector privado, como único camino para volver a la senda de crecimiento tan ansiada por todos los venezolanos.

Finalmente, este trabajo tiene una connotación especial, Venezuela no había estado nunca en una situación de crisis y postración como ahora. Hoy vivimos un caos económico y social sin precedentes y en el medio están las empresas y los trabajadores. Venezuela no tiene rumbo, el país está descarrilado y es en ese marco, y por la urgencia del momento, que presentamos este documento. Hoy podemos decir con propiedad que el sector productivo venezolano tiene una hoja de ruta y una propuesta amplia y estructural.

*Licenciado en Ciencias Administrativas. Mención Banca y Finanzas. Coordinador general del trabajo.

"Solución" exprés

El regreso a clases se acerca, lo que muchos de nosotros hoy nos preguntamos es qué tanto. En un contexto marcado por la incapacidad gubernamental de garantizar a la población los servicios básicos y las condiciones mínimas de libertad y justicia para el uso, goce y disfrute de estos, el sistema educativo pasó de la crisis a la emergencia y en este momento es una catástrofe: 27 mil instituciones educativas se encuentran en condiciones deplorables de infraestructura, la mitad de los 543 mil docentes registrados han abandonado las aulas y, hasta ahora, al menos siete de cada diez educadores han manifestado un profundo desacuerdo en relación al inicio del nuevo año escolar 2019-2020 porque el salario que perciben no cubre ni siquiera el 10 % de sus necesidades.

En teoría el año escolar está por comenzar, pero en la práctica no existen las condiciones reales que garanticen la educación consagrada en la Constitución del 99 y reconocida universalmente como un derecho humano; los docentes (los que nos quedan) lo viven junto a jóvenes y niños en las aulas; padres y madres padecen el calvario desde casa mientras se les arreglan para "resolver" el sustento de sus hogares; adquirir la lista de útiles escolares es una ilusión, los medios no paran de reseñar una crisis generalizada..., en resumidas cuentas, si la opinión pública lo sabe, las altas esferas de poder también.

Desde la revista *SIC* hacemos eco de estos datos presentados por la Subcomisión de Educación de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional (AN), hoy presidida por la diputada Bolivia Suárez, quien ante la fuga de profesionales y educadores ha denunciado con preocupación las pretensiones del Gobierno oficialista de allanar estos espacios, además, con un grupo de personas que carecen de la experticia necesaria a quienes, según la fuente, solo se les exige la cédula, el carnet de la patria y recibir un curso de 450 horas de preparación, sin importar si tienen realmente aptitudes para la formación de los alumnos:

La Asamblea Nacional y el sector educativo del país rechazamos esta figura que pretenden implementar, porque no reúne las condiciones necesarias para ser formadores del futuro de nuestra nación, no van a tener la preparación en conocimiento, ni en pedagogía, porque con 450 horas de clases para prepararlos es imposible formar a un docente.

Estas fueron las declaraciones de la diputada Suárez, quien en rueda de prensa rechazó rotundamente esta nueva modalidad de preparación, calificándola como "deficiente y mediocre", la cual pretende permeare el sistema educativo en todos los niveles con el firme propósito de "ideologizar y politizar la educación venezolana y mantener a las nuevas generaciones sumidas en la ignorancia y el desconocimiento."

Son los llamados *profesores y maestros exprés* o *insurgentes*, de los cuales el oficialismo —más allá de desmentir a los medios— poco se atreve a decir. El ministro de Educación, Aristóbulo Iztúriz, se pronunció a través de una nota de prensa, aclarando lo siguiente: "Aquí no hay maestros exprés, aquí todos deben

estudiar en la universidad para ejercer la carrera y el ejercicio docente. Pueden trabajar los no graduados, pero deben estar estudiando la carrera y luego pasan a obtener su titularidad", reiterando que todo lo anterior son "divulgaciones falsas".

A pesar de las declaraciones oficiales, existen indicios que parecen confirmar la postura demandante de la AN. Tanto que, a través del plan de *Chamba Juvenil* y *Chamba Mayor*, los registrados con intereses en áreas de educación asumirán la labor docente "previa aprobación de un curso de 5 semanas o 40 horas académicas de duración", según citan algunos medios nacionales. Esta política surge como iniciativa del Gobierno debido al déficit profesoral en todos los niveles educativos.

El próximo 25 de septiembre, la Asamblea Nacional junto al sector educación, realizarán acciones de calle en todo el territorio nacional a propósito de cumplirse un año de haberse declarado la emergencia educativa: "Estamos denunciando esta aberración en el sistema educativo. Este gobierno usurpador está destruyendo lo poco que quedaba de la educación venezolana", sentenció la diputada Suárez.

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 26, 1948) "los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos...", pero ¿qué hacemos cuando nos quedamos sin opciones?

Norte de Santander: la compleja coyuntura de la migración

“Por una frontera garante de los derechos humanos”

Wooldy Edson Louidor*



REUTERS / CARLOS EDUARDO RAMÍREZ

Lejos de ser una reseña, el presente artículo expone el proceso, el diseño y algunos resultados de la investigación, como una invitación a examinar la fuente primaria que dio origen al texto. Tal vez su valor estribe en mostrar cómo el libro decanta los múltiples sentidos que cobra una frontera tan compleja

como la colombo-venezolana: frontera geográfica binacional para los dos pueblos, frontera apostólica para la misión de la Compañía de Jesús, frontera epistemológica para los estudiosos de la migración y frontera política, en particular para la Colombia del posacuerdo



SJR COLOMBIA

Por una frontera garante de los derechos humanos. Colombianos, venezolanos y niños en estado de apatridia en el Norte de Santander (2015-2018). Este es el título del nuevo libro que dos entidades de la Compañía de Jesús en Colombia lanzaron conjuntamente el pasado 5 de mayo de 2019 en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Se trata del Servicio Jesuita a Refugiados (JRS Colombia, por sus siglas en inglés) y el Instituto de Estudios Sociales y Culturales *Pensar*, una unidad de investigación de la Pontificia Universidad Javeriana. De agosto de 2017 a julio de 2018, un equipo mixto de ambas obras jesuitas realizó una investigación sobre la coyuntura migratoria del Norte de Santander entre 2015 y 2018, de la cual este libro es el resultado.¹

Esta publicación aborda un tema de actualidad para Colombia y Venezuela: la compleja coyuntura en la frontera común, en particular en el Norte de Santander. Esta complejidad se refleja de manera particular en la situación de migración forzada (emigración venezolana y retorno colombiano) que enfrentan cientos de miles de personas², entre colombianos, venezolanos, colombo-venezolanos, y niños sin una nacionalidad, que llegan al Norte de Santander en busca de protección. Sin embargo, la mayoría de estas personas se encuentra desprotegida en

esta zona fronteriza al no poder acceder a sus derechos fundamentales (educación, salud, vivienda, entre otros), a pesar del gran despliegue mediático de discursos de buenas intenciones que vienen haciendo las autoridades colombianas a favor de los “connacionales” retornados y “hermanos venezolanos”.

Ante esta coyuntura del Norte de Santander, que ya de por sí ha sido históricamente abandonado y marginado (al igual que la mayoría de las fronteras de Colombia), ¿cómo comprender de la mejor manera posible la desprotección de este gran número de personas que llegan del país vecino?, ¿cómo enfrentar eficazmente esta desprotección para poder devolver a estas personas sus derechos humanos y su dignidad? A lo largo de sus casi doscientas páginas, el texto busca responder a estas dos preguntas generadoras.

Inspirados en los trabajos de la académica colombiana Socorro Ramírez y del filósofo francés Étienne Balibar (y de otros destellos teóricos de Homi Bhabha, Pierre Bourdieu, Abdelmalek Sayad y Seyla Benhabib), los cinco autores del libro empezamos por invitar a los lectores a repensar la frontera colombo-venezolana desde el enfoque de derechos humanos y la perspectiva binacional. Se trata, según nosotros, de ver este bello

Era completamente nueva la específica coyuntura migratoria “paradojal”, en la que importantes flujos de personas en situación de migración forzada no dejaban de llegar al Norte de Santander en busca de protección, pero lo que encontraban como respuesta era la desprotección.

lugar no como un límite que separa, excluye y divide, sino como un ecosistema rico y diverso que ha unido a los dos pueblos cultural, social, política, histórica y ecológicamente.

Es una *frontera geográfica binacional*. No es en vano que esta frontera, que cuenta con una extensión de 2 mil 219 kilómetros y un sinfín de “trochas”, ha sido considerada “la más viva del continente americano”; aunque se ha preferido estigmatizarla por la terrible mixtura de corrupción, violencia, contrabando, pobreza, delincuencia, narcotráfico y conflictos entre gobernantes de lado y lado, de que ha sido teatro.

De allí el título del libro y todo el desarrollo de su introducción, que plasman el llamado que hace la publicación.

UN PROCESO DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y CO-PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO

La investigación que da origen al libro nace de múltiples diálogos sostenidos en Bogotá y Cúcuta entre investigadores del Instituto *Pensar* y colaboradores del JRS Colombia, en torno a la compleja situación de la frontera colombo-venezolana que se viene presentando desde agosto de 2015. Esa coyuntura de total desprotección de las personas en situación de migración forzada requiere –decíamos anteriormente– a la vez de una mejor comprensión y respuesta por parte de nosotros, en cuanto dos obras jesuitas muy diferentes pero inspiradas en la misma misión de trabajar por una sociedad justa, incluyente, solidaria y hospitalaria en Colombia. En este sentido, esta es una frontera para dicha misión: una *frontera apostólica*. Desde un inicio, tuvimos claro como equipo de investigación este horizonte común teórico, práctico y basado en estos valores humanos, ciudadanos e ignacianos.

Ante la realidad que se estaba viviendo en esta zona, teníamos varias preguntas a las cuales no encontrábamos respuestas por ningún lado: ni desde el campo emergente de los estudios migratorios que el Instituto *Pensar* venía explorando, ni desde el territorio situado del Norte de Santander en el cual el JRS Colombia ha estado trabajando hace aproximadamente diez años. Era completamente nueva la específica coyuntura migratoria “paradojal”, en la que importantes flujos de personas en situación de migración forzada no dejaban

de llegar al Norte de Santander en busca de protección, pero lo que encontraban como respuesta era la desprotección. Y esto, a pesar de los esfuerzos loables de la institucionalidad colombiana y la cooperación internacional, así como de las múltiples texturas de solidaridad y hospitalidad manifestadas por la comunidad local urbana y rural.

Los problemas que esta coyuntura planteaba exigían, pues, un esfuerzo analítico que implicara la movilización de herramientas epistemológicas, conceptuales y teóricas, así como de conocimientos prácticos y experienciales de terreno. Para comprender una realidad tan *compleja*, hay que hacer un análisis *complejo* y contar con herramientas epistemológicas *complejas*: esta fue la primera lección que se nos impuso. Esta frontera se convertía para nosotros en una *frontera epistemológica*.

En este sentido, la colaboración entre nuestras dos entidades jesuitas se veía más que necesaria y –de hecho– se dio de manera espontánea; lo que generó esperanza tanto para la labor de investigación del Instituto *Pensar* como para el trabajo en terreno del JRS Colombia. Inmediatamente se conformó un equipo de investigadores mixtos que se dio a la tarea de elaborar una propuesta de investigación (con los requisitos exigidos por la academia en esta materia) que pudiera, al mismo tiempo, traducirse en un proyecto para la búsqueda de fondos (con los requerimientos técnicos exigidos por los financiadores). La tarea era doble y requería de capacidades y gestiones diferentes, pero complementarias y orientadas a favor de una causa común.

Después de semanas de trabajo conjunto, el equipo produjo la propuesta de investigación y el proyecto de búsqueda de financiamiento, resultado de esta colaboración que apenas iniciaba. Ambos productos se titularon: *Vacíos de protección y desafíos de la política pública de Colombia en torno al acceso a derechos de los connacionales retornados y migrantes forzados venezolanos en la frontera entre los dos países*.

Debido a la pertinencia de la propuesta investigativa y a la gestión eficaz del JRS Colombia en torno a la búsqueda de fondos para el proyecto, las dos organizaciones internacionales Open Society Foundations de los Estados Unidos de América y Cáritas alemana aceptaron financiar la realización del estudio como un primer paso que debía llevar a pos-

Se respiraba en el ambiente investigativo cierta pulsión estadística y sensacionalista que, en gran parte, hacía eco a ciertos medios de comunicación, los cuales se alarmaban de la venezolanización de la frontera y de Colombia.

teriores acciones de incidencia política, atención humanitaria y empoderamiento local. Este financiamiento permitió robustecer el equipo mixto de investigación por medio de la contratación de una joven asistente de investigación. Luego, se formalizó la colaboración entre ambas entidades jesuitas a través de un protocolo de entendimiento interinstitucional.

De agosto de 2017 a julio de 2018 se implementó la investigación a través de múltiples acciones: revisión de estado de arte, afinamiento del diseño conceptual-metodológico, e inclusión de las retroalimentaciones que habían surgido en diálogos con colegas investigadores; toma de contactos con autoridades, organizaciones, migrantes venezolanos y retornados colombianos en Bogotá y desde el terreno; realización de visitas exploratorias en el Norte de Santander y participación en espacios de encuentro en Cúcuta y Bogotá; aplicación de los instrumentos de investigación propiamente dichos; y, finalmente, validación de los resultados del estudio en Cúcuta y escritura del informe de la investigación.

En este proceso que duró un año exactamente, el equipo de investigación se reunió varias veces en Cúcuta, Bogotá y por Skype para intercambiar, dialogar, actualizar informaciones, enriquecer el análisis de contexto, discernir en común y decidir conjuntamente a lo largo de todas las fases del estudio. Queda aún por sistematizar este bello ejercicio de coproducción de conocimiento y colaboración simétrica entre dos obras jesuitas que pusieron, cada una, lo mejor que sabe hacer en provecho de la frontera colombo-venezolana, que –como lo decíamos– es también una “frontera apostólica” para la misión de la Compañía de Jesús.

UN DISEÑO CRÍTICO Y CREATIVO ANTE “UNA FRONTERA EPISTEMOLÓGICA”

El equipo definió la investigación como *exploratoria*, por las dos siguientes razones. Por un lado, constituye uno de los primeros estudios que se hace sobre la frontera colombo-venezolana desde el particular enfoque de protección de derechos humanos; se espera que abra el camino en esta línea y sea completado por otros estudios posteriores. Por el otro, deberá aportar conocimientos para fortalecer la labor del JRS Colombia en el Norte de Santander y contribuir a todas las obras jesuitas colombianas (co-

legios, parroquias y otros) interesadas en comprender y transformar la realidad de dicha frontera.

La definición del enfoque fue central para la investigación, ya que constituía nuestro punto de partida epistemológico, es decir: el locus desde el cual se fundamenta la investigación. Siendo un enfoque de derechos humanos, este parte de los lineamientos de los instrumentos jurídicos de protección de derechos humanos a nivel internacional y regional (incluyendo los del llamado *derecho blando*), de la legislación y política migratoria de Colombia, así como de las exigencias éticas de solidaridad y hospitalidad planteadas en particular por el papa Francisco. Toda la segunda parte (“Análisis multiescalar de los instrumentos jurídicos”) del segundo capítulo del libro, decanta en detalle el planteamiento de este enfoque; además, hace de manera crítica un balance de la legislación y política migratoria colombiana (y su implementación) y una evaluación de la aplicación de dichos instrumentos del derecho internacional –en concreto– a la migración venezolana, desde 2015, por parte del Estado colombiano.

Resulta que este enfoque de derechos humanos no ha sido común en los estudios y publicaciones sobre la frontera colombo-venezolana. Al contrario, ha habido una reverberación de diagnósticos e investigaciones tipo *think tank* que han buscado contabilizar, medir, cifrar, cuantificar, la emigración venezolana, así como dimensionar o calibrar la crisis humanitaria que viven las personas venezolanas en la frontera. Se respiraba en el ambiente investigativo cierta pulsión estadística y sensacionalista que, en gran parte, hacía eco a ciertos medios de comunicación, los cuales se alarmaban de la *venezolanización* de la frontera y de Colombia.

Frente a ello, hicimos el ejercicio de elaborar un estado del arte casi exhaustivo sobre el conjunto de libros, artículos, diagnósticos e informes, de carácter académico o no, que fueron publicados sobre esta frontera, a partir de agosto de 2015. Encontramos –sin ninguna sorpresa– que la mayoría de estos textos abordaban temas relacionados con seguridad, comercio binacional, corrupción, economía, contrabando, entre otros. Un pequeño porcentaje –por ejemplo, informes de agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de organismos nacionales e internacionales de derechos

Era lógico que había que hacer un esfuerzo de análisis para superar las miradas sesgadas, parciales y polarizantes, los puntos ciegos y así poder mirar la realidad en su verdad y complejidad. En este sentido, nos topábamos con una frontera epistemológica que había que cruzar para afinar nuestros instrumentos y categorías de pensamiento.

humanos y por supuesto del JRS—, trataba el tema de los derechos humanos y de la protección de las personas en situación de migración forzada.

Fuimos incluso más allá en nuestro ejercicio, al intentar visualizar las consecuencias directas de este poco abordaje de los derechos humanos en las maneras como se piensa, conceptualiza, comprende y analiza la coyuntura actual de la frontera. Hallamos, entre otras, las dos siguientes consecuencias:

La primera es que en estas visiones predominan una serie de claves de análisis centradas en seguridad, economía, problemas de reglamentación, dificultades institucionales, falta de visión a largo plazo, asistencia humanitaria, por encima de otras claves relacionadas con derechos, protección, acceso a derechos: es decir que el lenguaje y la perspectiva de los derechos humanos eran sub-representados.

Una segunda consecuencia tiene que ver con los puntos ciegos, que no permitían ver la complejidad de la frontera y, de manera especial, la coyuntura migratoria actual. Entre los varios puntos ciegos que señala el libro, menciono tres:

1. *La dificultad de evaluar la eficacia real de la respuesta excepcional de la institucionalidad colombiana* (hasta julio de 2018), debido a la incongruencia entre los discursos mediatizados de solidaridad con colombianos retornados y migrantes venezolanos por parte del Gobierno de Juan Manuel Santos y la realidad de desprotección que estos (y sus hijos) están viviendo

en la frontera. Lo que se escuchaba en los grandes medios en Colombia tenía poco o nada que ver con lo que pasaba realmente en el Norte de Santander.

2. *La cucutización de la emergencia en la frontera* que no dejaba mirar hacia otros territorios del Norte de Santander (por ejemplo, el Catatumbo y el Tibú) para “darse cuenta de los riesgos y las amenazas relacionados con la internacionalización del conflicto armado con la eventual participación de migrantes venezolanos” (p.71). Sabiendo que la guerra continúa en varios territorios del Norte de Santander y la migración forzada se está dando en dicho contexto de violencias.

3. *La negativa del Gobierno de Juan Manuel Santos a reconocer la existencia y la magnitud real de una crisis humanitaria en el Norte de Santander.*

En el libro se dedica todo un capítulo a describir minuciosamente y analizar críticamente este conjunto de claves de análisis, grises y puntos ciegos en torno a la coyuntura migratoria de la frontera colombo-venezolana. Era lógico que había que hacer un esfuerzo de análisis para superar las miradas sesgadas, parciales y polarizantes, los puntos ciegos y así poder mirar la realidad en su verdad y complejidad. En este sentido, nos topábamos con una *frontera epistemológica* que había que cruzar para afinar nuestros instrumentos y categorías de pensamiento. Para ello, tuvimos que hacer un trabajo epistemológico (inspirado en la sociología reflexiva de Pierre Bourdieu), empezando con nosotros mismos,



EFE / SCHNEYDER MENDOZA



SJR LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

El ser unas personas “sin nombres” es el símbolo más inequívoco y el ejemplo más elocuente de que son unos “sin estatus jurídico” (como si vivieran en un “estado de excepción”), “sin hogar”, “sin Estados” y “sin mundo”. Entendíamos que todo el drama jurídico, político-administrativo, social, humano y humanitario que implica la desprotección de estas personas se encontraba allí, condensado en germen, en este hecho epistemológico.

los investigadores: era pues necesario hacernos conscientes de nuestros propios prejuicios o prenocios para poder controlarlos y así limpiar lo mejor posible los lentes con los que íbamos a mirar la realidad de la frontera. En este sentido, el equipo de investigación decidió partir de preguntas; en particular, estas tres:

*Los venezolanos que emigran a Colombia desde 2016 aproximadamente a raíz de la crisis generalizada en su país de origen, qué son: ¿refugiados o migrantes económicos?*³

*Los colombianos que han estado retornando al país, qué son: ¿ciudadanos –algunos de ellos, víctimas del conflicto armado–, a quienes su Estado debe garantizar sus derechos constitucionales o simples beneficiarios de unos programas de retorno en el posacuerdo (“sujetos económicos”)?*⁴

*Los niños que llegan a Colombia, principalmente aquellos que no tienen nacionalidad venezolana ni tampoco la pueden obtener a corto y mediano plazo, y a los que el Estado colombiano les niega la nacionalidad, ¿qué son?, si no son apátridas –tal como lo afirman contundentemente las autoridades del país–.*⁵

Estas tres preguntas nos abrieron un mundo lleno de dolor y sufrimiento en el Norte de Santander: madres, niños, enfermos, jóvenes, familias separadas, mujeres víctimas de violencia..., que es-

peraban un acta de nacimiento, un cupo en el colegio, una atención médica, unas medicinas, unas terapias, unos exámenes, una ayuda humanitaria, los beneficios de programas del Estado, la posibilidad de regularizar su situación migratoria para poder trabajar, entre otros. Son preguntas que muestran cómo la desprotección afecta a vidas concretas, personas de carne y hueso, familias e incluso comunidades enteras –como los indígenas yukpas– que se encuentran en desarraigo.

Las dificultades para empezar el estudio tenían que ver primeramente con la ausencia de categorías para nombrar, definir y clasificar a estas tres poblaciones concretas que vienen llegando a la frontera desde agosto de 2015: *colombianos que retornan* (¿ciudadanos o beneficiarios de programas de retorno?), *venezolanos que llegan* (¿migrantes o refugiados?) y *niños/niñas sin una nacionalidad* (¿apátridas o qué?).

El ser unas personas “sin nombres” es el símbolo más inequívoco y el ejemplo más elocuente de que son unos “sin estatus jurídico” (como si vivieran en un “estado de excepción”), “sin hogar”, “sin Estados” y “sin mundo”. Entendíamos que todo el drama jurídico, político-administrativo, social, humano y humanitario que implica la desprotección de estas personas se encontraba allí, condensado en germen, en este hecho epistemológico. De allí el peso tan importante que el estudio acordó al marco teórico y metodológico que se desarrolla en el primer capítulo.

La delimitación del periodo de estudio se hizo con base en agosto de 2015 como punto de partida, ya que en esta fecha el presidente venezolano Nicolás Maduro decidió cerrar la frontera, deportar y retornar forzosamente a aproximadamente 20 mil colombianos hacia el Norte de Santander. La delimitación tomó como punto final julio de 2018, fecha que coincide con el fin de nuestra investigación, con la publicación del Decreto 1288 del 25 de julio de 2018 (que anunció finalmente una política de atención humanitaria a migrantes venezolanos y retornados colombianos, más allá de la respuesta a la emergencia social en la frontera) y también con la terminación del segundo mandato de Santos como presidente de Colombia (el 8 de agosto del mismo año).

También la definición de la población objeto de estudio se hizo con base en

Para el diseño teórico-conceptual de la investigación fue clave la categoría de “vacíos de protección”, redefinida de manera sofisticada (a diferencia del uso operativo que le viene dando el Acnur) por el Instituto Pensar –a partir de varios trabajos teóricos anteriores–...

estos tres segmentos demográficos, de los cuales partían nuestras preguntas: los colombianos que retornan (víctimas del conflicto armado o no), los venezolanos que llegan (incluyendo allí a todas las categorías y las que no tienen ninguna) y los niños sin una nacionalidad.

Esta delimitación temporal, espacial y poblacional de la investigación se recoge en el subtítulo del libro: *colombianos, venezolanos y niños en riesgo de apatridia en el Norte de Santander (2015-2018)*.

Por otra parte, el enfoque de derechos humanos nos permitió plantear que las tres poblaciones objeto de estudio enfrentaban no solamente una crisis humanitaria o un problema de seguridad, falta de empleo, carencias de servicios básicos, entre otras, sino una situación (in)humana en la que no tenían acceso al disfrute de sus derechos (ni aquí en Colombia, ni allá en Venezuela). Se encontraban pues ante serias dificultades existenciales, relacionadas con graves problemas de salud, alimentación, inseguridad, educación... (todos los derechos humanos básicos), para vivir y poder disfrutar de su dignidad humana.

El equipo de investigación planteaba de manera radical la problemática de la frontera en términos de derechos humanos y de protección. Por lo tanto, se enfocó en comprender los factores (no del todo evidentes) que han provocado esta desprotección generalizada de los derechos humanos. Es decir, se optó por un análisis lo más integral posible (holístico) que articulara lo estructural y lo coyuntural, la larga duración y el contexto inmediato, lo objetivo-institucional y lo subjetivo-personal, lo descriptivo y lo propositivo. Un análisis, que fuese acorde con la realidad de esta frontera que investigadores, como la académica colombiana Socorro Ramírez, nos enseñó a mirar desde su complejidad histórica, geográfica, política, ecológica y cultural.

Para el diseño teórico-conceptual de la investigación fue clave la categoría de “vacíos de protección”, redefinida de manera sofisticada (a diferencia del uso operativo que le viene dando el Acnur) por el Instituto *Pensar* –a partir de varios trabajos teóricos anteriores– como:

[...] un conjunto de dificultades, obstáculos, fallas, carencias, insuficiencias, debilidades, disparidades, incongruencias y acciones contraproducentes de

múltiples índoles (conceptual, analítica, jurídica, política, institucional, social), que impiden que un grupo de personas acceda al disfrute de sus derechos fundamentales y, así, se vea arrojado a una situación de desprotección. (p. 52)

Dicha categoría, así repensada, permitió a la vez conceptualizar y aplicar a la realidad de la frontera este análisis integral de todo aquello que impide que un individuo o un grupo de personas accedan al disfrute de sus derechos humanos. Esto “aquello” puede ir desde lo más abstracto (lo conceptual y epistemológico) hasta lo más concreto (lo social y lo político-institucional); cubre pues un gran plexo de dimensiones, variables y aspectos. De esta manera, dicha categoría era apta para ampliar teóricamente el espectro del análisis, pero sin perderse en elucubraciones innecesarias; y, al mismo tiempo, dar contenido empírico (sin ser esclava de la tiranía de lo real) a unos conceptos previamente construidos. Expliquemos.

Por ejemplo, las tres preguntas mencionadas de las que partimos en el estudio caben perfectamente en el gran espectro analítico de la categoría de *vacíos de protección* y, de hecho, constituyen el primer factor (“aquello” conceptual o categorial) que explica la desprotección, comprobable empíricamente, de las tres poblaciones objeto de estudio. De hecho, esas tres preguntas nos habían obligado a los investigadores a construir una categoría amplia (más amplia que las existentes e incluso que el uso operacional que el Acnur venía dando a los *vacíos de protección* –un uso a su vez orientado a analizar en qué medida los Estados y gobiernos aplican o no y hasta dónde los estándares de la protección internacional de los derechos humanos de refugiados–) para comprender la dificultad “categorial” que los nuevos migrantes forzados enfrentan hoy día. Ilustremos con el caso de los migrantes venezolanos.

Los venezolanos que llegan a Colombia (y a todo el continente americano e incluso a países de Europa) son ejemplos de estos nuevos migrantes forzados que –se dice– podrían no calificar jurídicamente para ser refugiados *de iure* o reconocidos (porque no hay, por decirlo así, una guerra civil o armada interna en Venezuela), pero tampoco se pueden considerar simplemente como migrantes,

El equipo de investigación viajó a Cúcuta y sus periferias, a los municipios aledaños del Norte de Santander –Puerto Santander y Banco de Arena– para conocer de primera mano la realidad de los migrantes venezolanos y retornados colombianos. Nos impactaron los testimonios recogidos en los grupos focales y en las historias de vida.

ya que su migración es forzosa; claro está que las causales de su migración no son las mencionadas por el *Estatuto de Refugiados de 1951 de la ONU*, sino otras igualmente forzosas (la crisis humanitaria, por ejemplo). Esta dificultad “categorial” se vuelve aún más compleja en los llamados “flujos mixtos” (igualmente ejemplificado en el caso de la migración venezolana al Norte de Santander), en los que llegan a la frontera de otro país olas mezcladas de refugiados, migrantes económicos, víctimas de trata y tráfico, entre otros; lo que vuelve casi imposible discernir y decidir quién sí necesita protección internacional y quién no.

Estas dificultades obligan a hacer un “rodeo teórico” para construir una categoría sofisticada y no simplemente operativa, que sea capaz de abarcar estas complejidades –relacionadas con la ruptura de dicotomías, por ejemplo, entre migrantes voluntarios y refugiados–, características de las nuevas migraciones forzadas pos Guerra Fría (es decir, las que se han producido desde la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), construir el objeto de estudio y proveer el marco teórico-metodológico adecuado para el desarrollo de la investigación. La categoría de *vacíos de protección* jugó justamente este triple papel, facilitando la construcción de un gran plexo de variables para estudiar las cuatro dimensiones de los vacíos de protección de las tres poblaciones objeto de estudio que nos interesaba abordar en el estudio: las dimensiones conceptuales-analíticas, jurídicas, político-institucionales y sociales.

Para llevar a cabo la *operacionalización* de la investigación, se aplicaron los siguientes instrumentos metodológicos de corte cualitativo:

- Revisión documental de un gran número de publicaciones realizadas sobre el tema de la frontera colombo-venezolana, desde agosto de 2015.
- Once (11) entrevistas en profundidad semiestructuradas a funcionarios de gobierno y Estado, centros de salud y de acogida de migrantes, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil.
- Cinco (5) grupos focales y decenas de historias de vida de población con necesidades específicas, tales como madres gestantes y lactantes, migrantes venezolanos en un centro de acogida, niños venezolanos que estudian en un colegio de Cúcuta, líderes de

comunidades rurales y barrios urbanos que acogen a personas venezolanas, entre otros.

- Observación participante con la comunidad indígena yukpa, proveniente de Venezuela, que se estableció en la periferia de Cúcuta (Barrio Escobar).

El equipo de investigación viajó a Cúcuta y sus periferias, a los municipios aledaños del Norte de Santander –Puerto Santander y Banco de Arena– para conocer de primera mano la realidad de los migrantes venezolanos y retornados colombianos. Nos impactaron los testimonios recogidos en los grupos focales y en las historias de vida.

También aprendimos mucho de las personas, habitantes del Norte de Santander que conocen muy bien ese contexto, que aceptaron –en entrevistas– compartir con nosotros no solo los posicionamientos oficiales de los organismos a los que pertenecen, sino también sus apreciaciones y reflexiones personales en el marco de esta nueva coyuntura inédita.

Conversamos con profesores-investigadores de la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Católica del Táchira; funcionarios de la Defensoría del Pueblo (Norte de Santander), la Cancillería (Programa Colombia Nos Une), la Personería Municipal de Puerto Santander, la Registraduría Departamental del Norte de Santander, el Servicio de Urgencias Hospital Erasmos Meoz y el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias-CRUE (Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander); miembros del Consejo Noruego para Refugiados, de OCHA (Norte de Santander), del Acnur (Oficinas de Cúcuta y Bogotá) y del Centro de Migraciones (Escalabrinianos).

RESULTADOS QUE ARROJAN DETALLES SOBRE LA DESPROTECCIÓN

Desde un sólido marco epistemológico y teórico-metodológico, la investigación pudo desmenuzar los detalles de la compleja realidad del Norte de Santander para comprender por qué y cómo las tres poblaciones objeto de estudio no podían acceder al disfrute de sus derechos, de agosto de 2015 a julio de 2018.

Se revisó una amplia gama de documentos e instrumentos publicados por la misma institucionalidad colombiana para responder de manera excepcional a la mencionada coyuntura considerada de emergencia social. Se analizó el con-

También se alude a las necesidades de protección de grupos étnicos, por ejemplo, los indígenas (en particular, los binacionales), quienes hablan poco español, sufren de la exclusión estructural acá y allá y cuyos derechos étnicos son violados o desconocidos.

junto de procedimientos y mecanismos político-administrativos y operativos que han buscado llevar dichas directrices institucionales oficiales a la práctica, a partir de las oficinas públicas locales. Se cartografiaron los espacios de coordinación dentro de la arquitectura institucional del Estado colombiano, en particular desde la articulación entre lo local (en el Norte de Santander) y lo central (en Bogotá), en el marco de la respuesta ante la realidad de la frontera.

Basados también en este minucioso trabajo analítico, los principales resultados de la investigación logran dar cuenta de los importantes detalles, donde justamente *está el detalle*—como bien lo reza la expresión popular—, que explican el por qué y el cómo de la desprotección de las tres poblaciones objeto de estudio. Lejos de generalizar y criticar de manera genérica, dichos resultados proyectan radiográficamente los mecanismos que no funcionan, los procedimientos que no son adecuados, las actitudes que no ayudan, en el marco de la respuesta de la institucionalidad colombiana. Dichos resultados se encuentran de manera exhaustiva en los dos últimos capítulos del libro, dedicados a los vacíos y necesidades de protección.

Si bien dichos vacíos, en particular los conceptual-analíticos, jurídicos y político-administrativos, se exponen de manera analítica, intentando arrojar una explicación estructural de la desprotección, con base en afirmaciones, consideraciones y posiciones (de alta com-

plejidad técnica) hechas por expertos, autoridades y especialistas durante las entrevistas en profundidad semiestructuradas; los vacíos sociales, que evidencian las necesidades de protección, son presentados por medio de testimonios igualmente potentes y dibujos muy dicentes, realizados por las personas (con especial vulnerabilidad compartida) que participaron en los grupos focales.

Como consecuencia de ello, por un lado, el libro está trenzado de testimonios (algunos extensos) a través de los cuales los mismos sujetos desprotegidos cuentan—con sus voces, narrativas y dibujos— su sufrimiento y también sus esperanzas. Por el otro, la publicación expone el calvario administrativo-institucional que enfrentan a diario los funcionarios locales de la institucionalidad colombiana en su tarea de responder a esta coyuntura difícil, en medio de una sistemática desconexión con las autoridades centrales de Bogotá y ante el miedo constante a ser castigados por eventuales errores administrativos.

Con respecto a las necesidades de protección, el estudio menciona las de familias venezolanas que llegan (y siguen llegando) en absoluta precariedad al Norte de Santander: se insiste en que la migración venezolana es cada vez más una migración de familias y no de individuos aislados, y que en estas familias hay necesidades muy específicas de sus miembros. Por ejemplo, los niños que experimentan fuertes sentimientos de desarraigo que les pueden generar dificultades psicológicas. Las mujeres: algunas de ellas, víctimas de violencia de género, y otras sufren de enfermedades o situaciones particulares, ligadas a su condición de mujer: cáncer de seno, embarazo, lactancia, entre otros.

También se alude a las necesidades de protección de grupos étnicos, por ejemplo, los indígenas (en particular, los binacionales), quienes hablan poco español, sufren de la exclusión estructural acá y allá y cuyos derechos étnicos son violados o desconocidos.

Finalmente, se refiere a las necesidades específicas de retornados colombianos que anteriormente habían emigrado por culpa del conflicto armado y que, por la difícil situación en Venezuela, tuvieron que regresar a Colombia; pero sus comunidades de origen (en el Catatumbo y el Tibú, por ejemplo) se encuentran actualmente en guerra y han tenido que desplazarse otra vez hacia Cúcuta.



AFP

Adoptar el enfoque de protección de derechos humanos, minimizar la brecha entre garantías establecidas por instrumentos de protección y la práctica institucional, y pasar de medidas transitorias a soluciones duraderas en procesos de acompañamiento, constituyen los tres principales retos de protección, recomendados por el estudio.



AP / DOLORES OCHOA

Estas necesidades de protección forman lo que en el estudio llamamos pliegues de vulnerabilidad, ya que estos sujetos comparten alguna vulnerabilidad específica como grupo (retornados que fueron víctimas del conflicto armado, niños/jóvenes venezolanos, mujeres, enfermos crónicos y terminales y afines) que intensifica su sufrimiento y desprotección, pero de manera casi imperceptible e invisibilizada.

Frente a estos vacíos y necesidades de protección, el libro subraya algunos retos de protección para la institucionalidad colombiana, de tal manera que esta (como principal garante de los derechos humanos en Colombia, de acuerdo con el derecho internacional) cumpla –más allá de las declaraciones de buena intención, discursos mediáticos y denuncias diplomáticas– con su deber constitucional e internacional de proteger los derechos humanos en la frontera colombo-venezolana y, en particular, los de las tres poblaciones desprotegidas y los pliegues de vulnerabilidad en el Norte de Santander.

Adoptar el enfoque de protección de derechos humanos, minimizar la brecha entre garantías establecidas por instrumentos de protección y la práctica institucional, y pasar de medidas transitorias a soluciones duraderas en procesos de acompañamiento, constituyen los tres principales retos de protección, recomendados por el estudio. Todo ello debe, por supuesto, estar enmarcado en una nueva concepción de la frontera que no privilegie lo nacional (soberanía, ciu-

dadanía) excluyendo de manera dicotómica todo lo “no nacional” (lo que se encuentra más allá del trazado limítrofe), sino que apueste a “construir una frontera garante de los derechos humanos, incluyente, abierta y gestora de procesos ciudadanos democráticos, multiculturales, transformadores y abiertos a la diferencia, la alteridad y la otredad” (p.179).

De allí el llamado del libro a privilegiar en la frontera el enfoque de protección y garantía de derechos humanos desde la concepción y el diseño de todas las políticas públicas y medidas jurídicas, hasta su aplicación concreta.

De allí también la invitación que reitera el libro en sus páginas conclusivas a abordar la actual coyuntura migratoria de la frontera colombo-venezolana como una oportunidad política para repensar y construir una Colombia garante de los derechos humanos, en paz, democrática, solidaria, hospitalaria y comprometida con la dignidad humana. Solamente así, la frontera pasará de ser el trazado limítrofe de un Estado que excluye, discrimina y hostiliza hacia dentro y hacia fuera (en nombre de la soberanía), para convertirse en un puente que nos une con los vecinos y otros seres humanos, en particular con aquellos que necesitan protección. La frontera colombo-venezolana es pues, una frontera para repensar políticamente la Colombia que queremos: es *una frontera política*.

Sin embargo, esta nueva concepción de la frontera contrasta con la actual realidad de desprotección en el Norte de Santander; desprotección que no em-

No se ha entendido por qué el Estado colombiano no ha querido aplicar las medidas de dichos instrumentos, que fueron justamente pensadas para estas situaciones emergentes de crisis migratoria; situaciones frente a las cuales los Estados no tienen la suficiente claridad para responder satisfactoriamente.

pezó con la llegada masiva de los venezolanos a partir de 2016, ya que tiene una larga duración histórica y un trasfondo estructural. Pero, en la actual coyuntura migratoria que el estudio aborda puntualmente, los investigadores concluimos que hay cuatro grandes *cuellos de botella* que no son del todo visibles, pero ralentizan y bloquean cualquier posibilidad para enfrentar con éxito la desprotección y/o brindar garantías para la protección en el Norte de Santander. Se trata de:

1. *La falta de nombres, categorías y claves de análisis para definir y caracterizar a las tres poblaciones mencionadas y su situación*; lo que incide en una serie de imprecisiones y confusiones a la hora de definir el estatus jurídico de cada una de las tres poblaciones, priorizar principios claros para su acceso a derechos y –con base en y supeditado a ello–, establecer rutas procedimentales-administrativas transparentes y eficaces y facilitar procesos reales de integración social. Se evidencia cómo se articulan y relacionan de manera estructural los cuatros tipos de vacíos para ralentizar y bloquear cualquier posibilidad de protección.
2. *La perduración del carácter transitorio de las innumerables medidas legales* (entre decretos, circulares, resoluciones, memorandos, etcétera), tomadas por el Gobierno de Santos –periodo que cubre el estudio– para aliviar el sufrimiento y resolver al menos provisionalmente los problemas de las personas desprotegidas; lo cual ha creado un gran número de conflictos entre estos mismos instrumentos (a veces, el que viene después contradice el anterior) y la normatividad ordinaria, por ejemplo la Constitución Política Vigente (que garantiza derechos). Lo que constituye el *cuello de botella* es precisamente el hecho de que se convierta cada vez más en permanente una decisión excepcional (no normal) que debía ser transitoria y reglamentada por (y no contradictoria con) el ordenamiento institucional normal y la normatividad existente.
3. *La desarticulación entre la respuesta igualmente transitoria del Gobierno* (que prolongó de manera indeterminada la excepcionalidad, prácticamente desde agosto de 2015) y, por una parte, las autoridades locales del Norte de Santander y, por la otra, los

instrumentos internacionales y regionales de protección de los derechos humanos, ya ratificados y firmados por el Estado colombiano (por ejemplo, la *Convención sobre el Estatuto de los apátridas*, adoptada en Nueva York el 28 de septiembre de 1954 y la *Convención para reducir los casos de apatridia*, adoptada en Nueva York el 30 de agosto de 1961), incluyendo los del llamado *derecho blando*: *Declaración de Cartagena* de 1984, *Declaración y Plan de Acción de México* de 2004, *Declaración y Plan de Acción de Brasilia* de 2014, entre otros. No se ha entendido por qué el Estado colombiano no ha querido aplicar las medidas de dichos instrumentos, que fueron justamente pensadas para estas situaciones emergentes de crisis migratoria; situaciones frente a las cuales los Estados no tienen la suficiente claridad para responder satisfactoriamente. Por ejemplo, una de estas medidas es la de “Fronteras solidarias”.

4. *Los pliegues de vulnerabilidad* de un gran plexo de personas, familias y grupos especiales, que viven en carne y hueso las consecuencias de los vacíos de protección y, además, enfrentan a menudo las actitudes hostiles de la población de llegada; sin desconocer que también reciben a veces muestras de solidaridad y hospitalidad desde texturas comunitarias no tan visibilizadas. Las personas que se encuentran en dichos pliegues son principalmente:

... mujeres embarazadas, lactantes y víctimas de violencia de género; enfermos crónicos, terminales y psiquiátricos; niños, niñas, adolescentes y jóvenes que requieren de acompañamiento humano y psicosocial en su proceso de integración escolar; adultos mayores; jóvenes que no cuentan con ninguna posibilidad para estudiar y trabajar, y comunidades indígenas binacionales que son aquejadas por el hambre, la incompreensión e injusticia de ambos Estados (p.176).

El *cuello de botella* se encuentra justamente en la invisibilización de su situación dramática dentro de estos grandes flujos migratorios que llegan a la frontera. Su vulnerabilidad, que es intensificada por alguna condición específica, se pliega bajo la imponente rea-

Evidentemente una frontera garante de los derechos humanos invita, aún más en este turbulento contexto de posacuerdo, a repensar una Colombia también garante de derechos humanos, en aras a superar definitivamente la frontera política de un país hasta ahora fracturado y anclado en una historia de guerra, exclusión y desarraigo.



lidad de la frontera y de la coyuntura migratoria.

CONCLUSIONES

El libro no pretende decir la última palabra sobre la frontera colombo-venezolana y mucho menos sobre la compleja coyuntura migratoria que se ha vivido en el Norte de Santander desde agosto de 2015. Cristaliza simplemente el proceso epistemológico de una investigación exploratoria, realizada conjuntamente por dos entidades jesuitas que buscaban y siguen buscando la mejor manera de comprender dicha coyuntura, en la que una gran cantidad de seres humanos –independientemente de su estatus migratorio y origen nacional– sufren a diario de la desprotección de sus derechos.

La investigación dio pie para poner juntos las capacidades complementarias de ambas obras jesuitas al servicio de una *frontera apostólica* de la Compañía de Jesús, a saber: la *frontera geográfica* entre ambos países, donde los vacíos de protección de tantas personas constituyen una *frontera epistemológica* que toca cruzar para poder mirar y estudiar la coyuntura migratoria del Norte de Santander en su verdad y complejidad.

Evidentemente una frontera garante de los derechos humanos invita, aún más en este turbulento contexto de posacuerdo, a repensar una Colombia también garante de derechos humanos, en aras a superar definitivamente la *frontera política* de un país hasta ahora fracturado y anclado en una historia de guerra, exclusión y desarraigo.

*Profesor e investigador del Instituto *Pensar* de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá).

NOTAS:

- 1 Todas las citas mencionadas en este artículo provienen del libro: LOUIDOR, W. E.; CALDERÓN BARRAGÁN, O. J.; CASTELLANOS BRETÓN, A.; LEAL GUERRERO, S. C; SIERRA ABRIL, P. J. (2010): *Por una frontera garante de los derechos humanos. Colombianos, venezolanos y niños en estado de apatridia en el Norte de Santander (2015-2018)*. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
- 2 A la fecha algunos hablan de más de dos millones de venezolanos que habrían pasado por esta frontera.
- 3 El estudio hace mención del muy bajo (casi nulo) porcentaje de estatus de refugiados que otorga, en general, el Estado colombiano a solicitantes de refugio, en particular, los de origen venezolano.
- 4 Hay una invisibilización de estos colombianos y de sus familiares en medio de la *venezolanización* de la frontera, que se puede definir como la acción de homogeneizar y tratar de la misma manera a todos aquellos que vienen de Venezuela, incluyendo los mismos colombianos, los colombo-venezolanos (personas con doble nacionalidad o con posibilidad de tenerla) y las familias mixtas.
- 5 Hay más de 3 mil niños, hijos de venezolanos, pero también de colombianos y de familias mixtas, que se encuentran en un limbo jurídico en Colombia.



DANIELA AGUILAR

Pequeñas acciones que suman

***Olla solidaria:* un signo de solidaridad desde la fe**

Javier A. Fuenmayor T., s.j.*

Ante las penurias que vivimos hoy, sensibilizarnos con el otro se vuelve necesidad. Por ello, la *Olla solidaria* quiere ser un gesto de solidaridad con los hermanos más necesitados que se encuentran viviendo con mayor dureza la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela

En los espacios de la parroquia de la Universidad Central de Venezuela (ucv) también compartimos más que libros usados, clases extras y horas de profundo encuentro con Dios, una jornada mensual de servicio dedicada a asistir a personas en situación de calle y pobreza extrema que atienden, junto a nosotros, al llamado que nos hace Dios a encontrarnos como hermanos en torno a su mesa. La actividad de la *Olla solidaria*, pues, consiste en compartir el almuerzo de un domingo al mes en familia, con los más necesitados.

De forma simultánea, se desarrollan tres actividades más: la primera, un espacio de actividades lúdicas y recreativas para los niños que vienen con sus familiares; la segunda, la distribución de ropa en buen estado por medio del “ropero parroquial” que se ha ido nutriendo con las donaciones de los feligreses; la tercera, a través de charlas formativas en valores y conciencia ciudadana para los asistentes.

Esta actividad surge ya hace más de cuatro años cuando, en vista de que la crisis económica iba teniendo un impacto tan negativo en los más pobres y su alimentación, toda la Iglesia se avocó a generar espacios de solidaridad y asistencia que dieran respuesta efectiva a la dramática situación. La *Olla solidaria* nace con el objetivo de responder a esa realidad, pero al mismo tiempo con la conciencia de que su alcance real para la solución de la crisis es muy limitado.

UNA CULTURA AUTÉNTICA DE SOLIDARIDAD

El impacto positivo de esta actividad consiste en generar una auténtica cultura de la solidaridad y fraternidad en medio de la crisis. Esto posee una fuerza moral y espiritual muy grande que es capaz de desatar dinamismos que abran nuevas perspectivas y horizontes de respuesta. En la parroquia universitaria esta iniciativa fue impulsada por el P. Raúl Herrera, s.j., quien fuera párroco en su momento, con la colaboración de la comunidad de fieles. Entre esa feligresía colaboradora y sensible a la realidad jugó un papel muy importante el señor Fernando Albán, quien desde sus funciones como concejal apoyó con gran generosidad esta iniciativa, no solo en la parroquia universitaria sino también en otras parroquias aledañas de Caracas.

El señor Albán fue un voluntario sumamente entregado a esta labor, poniendo al servicio del desarrollo de esta actividad a todo su equipo de trabajo. Era una persona muy apreciada en la comunidad por el gran impulso y motivación que ponía en cada *Olla*. “Lo hacía para los más pobres, los que más necesitan”, decía. Por eso su recuerdo en la parroquia universitaria estará siempre presente.

La *Olla solidaria* ha ido evolucionando en los últimos dos años de manera positiva. Es importante destacar los avances a nivel organizativo y de la consolidación del voluntariado. La cantidad de beneficiarios ha ido en incremento, registrando un número que oscila entre 180 y 220 personas, llegándose a repartir hasta más de cuatrocientos platos de comida, habiendo ocasiones en las que los comensales almuerzan dos veces. También se ha establecido la bebida como parte del menú, cosa que no existía en los inicios. Todo esto gracias a la generosidad de los colaboradores que lo hacen posible.

LA VOLUNTAD DE SERVIR AL PRÓJIMO

Si algo ha caracterizado esta actividad es el gran espíritu de familia y fraternidad que impregna a todos los voluntarios. No se trata solo de hacer los alimentos y distribuirlos, sino que en el mismo modo de brindar este servicio ya hay un mensaje implícito de respeto y dignidad que todos los colaboradores quieren transmitir. De allí que es fundamental el buen trato para con todos los beneficiarios, la palabra amable, la disposición a recibirlos y compartir, resaltando la dignidad humana que todos tenemos. Esto es, pues, algo que ha formado parte distintiva del equipo de trabajo: la voluntad de servir al prójimo.

El modo de hacer la actividad significa mucho para todos, precisamente porque la mayor riqueza de los que participan en la *Olla solidaria*, ya sea como voluntarios o beneficiarios, es la riqueza humana que supone el encuentro fraterno con otros enmarcado en el respeto mutuo, la dignidad y la solidaridad. La riqueza de una auténtica cultura del encuentro que enriquece a todos en humanidad.

UNA EXPRESIÓN DE FE

Desde la mirada de la fe esta actividad se convierte en reflejo de la experiencia del Dios encarnado. La fe vivida de forma encarnada en la realidad y la concreción en la experiencia del hacerse hermano y prójimo del que más necesita y requiere de apoyo, es un rasgo indiscutible de la fe cristiana.

La parroquia, como comunidad de comunidades de fe en Jesús y su Reino, manifiesta su identidad más auténtica cuando es capaz, desde ese contacto directo con la realidad, de poner a las personas en relación directa y personal con Dios. Esa relación con Dios es la fuente de felicidad y plenitud humana que las parroquias, desde todo su despliegue pastoral, buscan transmitir de forma personalizada y encarnada en fidelidad a Jesús de Nazaret a través del Espíritu Santo. Un auténtico itinerario mistagógico a partir de esa centralidad vital en el Dios de la vida.

Testimonio de los colaboradores

Mariela Albán

Coordinadora de la preparación de los alimentos. Hermana del señor Fernando Albán.

“Para mí la *Olla solidaria* ha sido una vivencia de amor y solidaridad con esas personas de bajos recursos y en situación de calle. Una experiencia nunca antes vivida. Eso me llena el espíritu de regocijo al ver cómo se convierte nuestro trabajo en caras de dicha y satisfacción...”

Gerardo Zambrano

Coordinador de la *Olla Solidaria*

“Con el pasar del tiempo, asistiendo, colaborando y sirviendo en la *Olla solidaria*, uno va cambiando la perspectiva de las cosas, es decir, lo que uno creía que era importante y urgente resulta que en realidad no era así. Florecen otras cosas que merecen más importancia, como cultivar una amistad, invertir tiempo en una buena causa, en fin, la vida cobra otro sentido, servir y compartir.”

Yaira Marciano

Coordinadora del Ropero Parroquial

“Estoy convencida que estos pequeños gestos de amor pueden cambiar la vida y tocar el corazón de estas personas. Particularmente a mí, me ha generado un sentimiento de satisfacción y alegría el poder servir al prójimo. Ha despertado una conciencia maravillosa. Me ha hecho comprender que no hace falta tener riquezas ni abundancia para poder ayudar; solo un gesto, por pequeño que sea, suma.”

Una actividad como la *Olla solidaria* puede ser entendida como un espacio significativo para cultivar y fortalecer la experiencia espiritual, dejándose sorprender por ese Dios que se hace el enconadizo en los rostros y la vida de los que más necesitan. Una invitación constante a reconocerle en los más pequeños y a crecer en la capacidad de hacerse hermano de todos.

Definitivamente necesitamos generar una nueva cultura del encuentro y la solidaridad. Nuestro país está urgido de una mirada trascendente ante la realidad tan compleja y dramática, una mirada que sea capaz de reconocer ese paso del Dios de la vida invitando a ser partícipes y colaboradores de nuevas realidades que generen vida, dignidad, justicia, respeto y fraternidad. Actividades como esta son signos de lo que estamos llamados a construir como sociedad. Seamos signos de esperanza, solidaridad y fe.

*Párroco de Epifanía del Señor, parroquia UCV.

Intervención y acompañamiento psicosocial

Jóvenes venezolanos en alto riesgo social

Robert Rodríguez, s.j.*

El Movimiento Juvenil Huellas es la apuesta de pastoral juvenil de la Provincia de Venezuela. Esta obra fue fundada por el padre Miguel Matos s.j. el 9 noviembre de 1989, con el objetivo de construir una plataforma común de trabajo con jóvenes de sectores populares en todo el país. A lo largo de estos años ha brindado diversos programas y servicios que responden a las necesidades de esta población



JESUITAS DE VENEZUELA



En el Movimiento Juvenil Huellas nos implicamos, principalmente, con jóvenes de escasos recursos económicos que están en situación de riesgo debido a la desigualdad social imperante en las comunidades donde habitan. Actualmente están asociados 9 mil 299 jóvenes escolarizados, con edades comprendidas entre doce y veintiséis años: 48 % de género masculino y 52 % femenino, de contextos culturales diversos; la mayoría de ellos son de barrios suburbanos, pero no pocos de ellos son campesinos e indígenas. Algunos solo estudian y otros además de esto trabajan simultáneamente, sobre todo los más veteranos.

Desde el enfoque vocacional y de derecho¹, para nosotros, son “jóvenes capaces”, con buena experiencia formativa y con sensibilidad social, huellistas con capacidad reflexiva y experiencia espiritual religiosa, soñadores, imaginativos, hasta idealistas. Son acompañados a nivel nacional por 707 entusiastas voluntarios.



HUELLAS VENEZUELA

Como director de Huellas en estos tres años, a partir de mi observación etnográfica, quisiera aportar aspectos a tener presente en la intervención psicosocial con jóvenes venezolanos en alto riesgo social que construyen su identidad, desarrollan capacidades y sentido de vida en un país en *emergencia humanitaria compleja*².

Siguiendo a Martín-Beristain³, entiendo que esa intervención no es abstracta, sino histórica, diferenciada e inductiva, es decir, se desarrolla desde la realidad personal, cultural e institucional de los ciudadanos afectados con la finalidad de fortalecer capacidades individuales y colectivas y mejores condiciones de calidad de vida para todos.

PROMOVER EL ASOCIACIONISMO JUVENIL

El deterioro institucional venezolano actual, según Provea (2018), causa un sentimiento de desprotección y vulnerabilización en los jóvenes, que se agudiza porque ven a sus padres con solvencia limitada para afrontar la crisis y porque, en su entorno, organizaciones e instituciones comunitarias han dejado de funcionar como otrora. En efecto, la intervención psicosocial tendría que impulsar acciones de activación y fortalecimiento de la institucionalidad y organización comunitaria que incentiven el asociacionismo juvenil, que produce espacios seguros y de protección para jóvenes, para que desde esos ámbitos existenciales, simbólicos y normalizados, puedan continuar viviendo su alegría y sus sue-

ños juveniles, y así construir lazos y capital social, y desarrollar habilidades de liderazgo personal y comportamientos de protección ante bandas de grupos criminales organizados y redes mafiosas que ofrecen pseudo-seguridades y caminos fáciles en la emergencia.

DESARROLLAR HABILIDADES DE LIDERAZGO CIUDADANO Y PARTICIPACIÓN

En el país estamos viviendo un “duelo social”⁴; es decir, un sentimiento de pérdida compartido por causas contextuales comunes que nos conectan en un mismo sentir por causa de muertes generadas por la violencia criminal y política; por emigración de familiares, amigos y amores; por expectativas políticas fracasadas; por pérdida de la confianza en el propio poder personal y ciudadano para superar la crisis y estilos de vida que se fueron para no volver. Esto ha desenraizado a los jóvenes, que se sienten impotentes en “su no-lugar” y con narrativas significativas caídas, lo cual los coloca en situación de búsqueda de nuevos fundamentos y sentidos, dentro o fuera de Venezuela.

Al respecto, sería conveniente abrir espacios comunitarios lúdicos, de intercambio y creatividad para que los jóvenes compartan y resignifiquen sus pesares en torno al país, vividos y sufridos día a día en sus familias y en sus barrios; pero, sobre todo, para que conviertan la afectación en reflexión e indagación de investigaciones, relatos y acciones sociopolíticas esperanza-

doras, que ofrecen un análisis movilizador. Con esto, lo que se pretende es que los jóvenes, aunados a su experiencia sensible, desarrollen habilidades de liderazgo ciudadano, adquiriendo conocimiento de las causas que producen pérdidas pero, a su vez, descubran las potencialidades de su tierra y de su gente, que convocan la fuerza y talento juvenil.

A los jóvenes los moviliza imaginar el país que merecen; y, mucho más, lo hemos visto en Huellas con la metodología Reto País-UCAB: proyectar trayectorias de acción local orientadas a construir ese país deseado porque, en este tipo de experiencias, en ejercicio de reflexividad, se reconocen como “personas capaces”, “ciudadanos”, “agentes de cambio”, representaciones que les inspiran nuevas narrativas de vida en Venezuela.

IMPULSAR UNA VISIBILIZACIÓN POSITIVA DE LOS JÓVENES

Pero la participación local juvenil requiere que la intervención psicosocial en Venezuela impulse también una “visibilización positiva” de los jóvenes⁵, es decir, que en los medios de comunicación se les muestre con su poder creador y no meramente como víctimas-victimarios de la violencia venezolana. Sería necesaria una campaña de concientización que haga explícito que todo proceso de transición y desarrollo sustentable debe incluir al ciudadano juvenil, especialmente porque Venezuela está en situación de bono demográfico⁶.

Esa *visibilización positiva* vence estereotipos negativos sobre jóvenes en alto riesgo social, creando posibilidades de apoyo a sus acciones por parte de personas, grupos y organizaciones comunitarias de buena voluntad. En consecuencia, la sociedad civil organizada estaría más propensa a reconocer, respetar e incluir a agentes juveniles en sus procesos de desarrollo local. Con todo esto, la intervención psicosocial facilitaría que el joven afronte la emergencia desde el empoderamiento (personal y ciudadano) y la participación social.

CAPACITAR PARA FORJAR UN NET-ACTIVISMO INTELIGENTE

En medios sociales digitales, los jóvenes “nativos digitales” expresan su sentir, sus ideas y críticas a la situación país, al mismo tiempo que interactúan con otros. En Venezuela se utiliza la comunicación cínica y la “mentira institucional”⁷, que tiemplan afectivamente a cualquiera que tenga grados mínimos de sindéresis. Pero aquí no todo se puede expresar con ingenuidad, rabia o arrebatos juveniles, porque hay una ley contra el odio que ha activado todo un sistema de vigilancia digital que castiga la libertad de expresión.

Por lo tanto, hay que instruir a los ciudadanos juveniles para que desde sus dispositivos inteligentes ejerzan un *net-activismo* astuto⁸, no solo catártico, sino también analítico y creativo de perspectivas que enriquezcan la hermenéutica y praxis sociopolítica de la sociedad civil y del Estado. De una u otra forma, se trataría de que se integren como actores locales propositivos a redes legales de incidencia sociopolítica nacional e internacional⁹.

Los jóvenes venezolanos, por la vulnerabilidad que les aqueja, están en los objetivos de depredadores, sean estas personas, grupos u organismos criminales que vigilan la Internet para identificar y en-redarlos en comportamientos antisociales y de violación de derechos humanos. Entonces, se trata de capacitarlos para ejercer un *net-activismo* con criterios y procedimientos de protección y denuncia ante agresores.

DE-CONSTRUIR EL REMORDIMIENTO Y LA VENGANZA COMO CAMINO DE SUPERACIÓN DE LA VIOLENCIA

En los últimos años, ser policía, guardia nacional, funcionario de la policía científica (CICPC) o militar, ha entrado con fuerza en el proyecto de vida de jóvenes de comunidades vulnerables, donde se naturaliza la violencia. Esto se debe a la militarización psicosocial (Martín Baró, 1990) que ha desarrollado un Estado que se autodefine como cívico-militar. Pero, además, a la violencia sufrida por los jóvenes quienes, por heroicidad y necesidad de venganza, se quieren convertir en “funcionarios” amparados por una institucionalidad fuerte, que los configura como micro poderes de decisión y armados en contextos violentos.

Entonces, los jóvenes necesitan espacios de intercambio y creatividad que les permitan relatar y comprender críticamente la violencia sufrida; pero fundamentalmente de-construir el remordimiento-venganza como estrategia de superación de la afectación, al mismo tiempo que generan habilidades personales para procesos de perdón y reconciliación. En este contexto, se les implica en procesos de educación para ser constructores de paz a fin de que ningún tipo de violencia asesine o cause sufrimientos a otros jóvenes.

ACOMPañAR A REELABORAR LA BRÚJULA MORAL Y ÉTICA DE LOS JÓVENES

Toda revolución religiosa, como la chavista, produce una inversión de valores¹⁰, es decir, un cambio en la red de significados que reorientan el sentir, comprensión y acción del pueblo. En tal sentido, en el país lo excepcional es lo normal (porque vivimos cotidianamente en Estado de excepción), lo paralelo es lo estatal, la paz es la guerra, el pueblo son unos pocos, la indepen-



JESUITAS DE VENEZUELA

dencia y autonomía es la dependencia, lo legal es lo criminal (piense en el funcionario que aplica la ley para sacar provecho personal), la productividad es *enchufarse*, la mentira es la verdad institucional, la mediocridad es un valor (piense en el sistema educativo que promueve de grado y graduá bachilleres sin tener las competencias mínimas) y algunas demandas de la cotidianidad se resuelven efectivamente a través del *bachaqueo*, es decir, por medio de lo mafioso. En consecuencia, la axiología juvenil se encuentra en confusión continua, derivando en juicios y decisiones existenciales desacertadas, que colocan a los jóvenes en situaciones de mayor vulnerabilidad.

Desde esa perspectiva, la intervención psicosocial, en alianza con la fuerza institucional de la sociedad civil, debe motivar a los jóvenes a reelaborar críticamente su brújula moral y ética con la finalidad de que la axiología clásica —esa que resalta el valor de la verdad, honestidad, integridad, constancia, esfuerzo, excelencia, trabajo—, retorne a ellos, y la re-signifiquen en diálogo con lo contemporáneo de la sociedad global que, por ejemplo, en este tiempo se le ha catalogado como la ética de los *millennials*¹¹.

INCENTIVAR EL EMPRENDIMIENTO CON HORIZONTE DE FUTURO

En los jóvenes, modelados por adultos de su entorno inmediato, también se ha producido un proceso psicosocial de “elementarización”¹², que refiere a que la persona enfoca toda su energía y capital para afrontar exitosamente el “aquí y ahora”, pero sin horizontes; en efecto, su actitud y acción productiva se convierte en laborar para sobrevivir¹³ y no en trabajar para producir valor. Eso acarrea que muchos jóvenes están

abandonando el aula de clases y, por ende, desatienden su horizonte para generar dinero y ayudar a sus familias. En esta situación, la intervención psicosocial para retener a los jóvenes en el sistema educativo pasa por motivarlos a reconocer críticamente la *elementarización* en ellos; la diferencia entre labor y trabajo y productividad; mostrarles ideas y oportunidades de emprendimiento en un país en crisis, y capacitarlos con actitudes y habilidades para el emprendimiento económico, armónico con su situación de estudiantes que construyen su futuro.

Finalmente, en consecuencia de todo lo anterior, la intervención y acompañamiento psicosocial a jóvenes en situación de alto riesgo social, liderada por la sociedad civil organizada e instituciones de buena voluntad del Estado, lograría no solo dar apoyo psicológico, sino también empoderar a jóvenes, a nivel personal y ciudadano, para que se impliquen como líderes replicadores de aprendizajes y habilidades que modelan a niños y otros jóvenes de la comunidad para afrontar la *emergencia humanitaria compleja* desde la catarsis emocional ética, la generación de capital social, el empoderamiento, la participación y la inclusión de su fuerza y creatividad en la sinergia institucional, nacional o internacional, que reconstruye mejores condiciones de calidad de vida para todos en Venezuela.

*Director del Movimiento Juvenil Huellas.

NOTAS:

- 1 MORA, L. (2011): *Desarrollo adolescente y derechos humanos*. Caracas: Red de apoyo por la Justicia y la Paz/UNICEF.
- 2 PROVEA, (2018): *Balance de la situación de los derechos humanos en Venezuela. Informe anual de derechos humanos*. Caracas: Provea. Recuperado de <https://www.derechos.org.ve/informe-anual/informe-anual-enero-diciembre-2017>
- 3 MARTÍN-BERISTAIN, C. (2012): *Acompañar los procesos con las víctimas*. Colombia: PNUD.
- 4 BUTLER, J. (2006): *Vida precaria: el poder del duelo y la violencia*. Buenos Aires: Paidós.
- 5 KRAUSKOPF, D. (2012): “Dimensiones críticas en la participación social de las juventudes”. En: BALARDINI, S. (comp.) *La participación social y política de los jóvenes en el horizonte del nuevo milenio* (pp. 137-154). Buenos Aires: Clacso.
- 6 ZÚÑIGA, G. (2016): *Perspectivas de la juventud venezolana. Una mirada a sus oportunidades*. Caracas: Friedrich Ebert Stiftung.
- 7 MARTÍN-BARÓ, I. (1990): *Acción e ideología. Psicología social desde Centroamérica*. (4ª ed.). San Salvador: UCA Editores.
- 8 DI FELICE, M. (2012): *Netativismo: novos aspectos da opinião pública em contextos digitais*. FAMECOS. 19 (1), pp. 27-45.
- 9 CRITCHLEY, S. (2007): *Infinitely demanding: ethics of commitment, politics of resistance*. New York: Verso.
- 10 NIETZSCHE, F. (1981): *La genealogía de la moral*. Madrid: Alianza Editorial.
- 11 HOWE, N. y STRAUSS, W. (2018): *Millennials rising. The next great generation*. New York: Vintage Books.
- 12 TRIGO, P. (2015): *¿Cómo vivimos los venezolanos nuestra situación?* Caracas: Fundación Centro Gumilla.
- 13 ARENDT, H. (2003): *La condición humana*. Buenos Aires: Paidós.

Para una transición política en Venezuela

Claves del documento de Puebla

Pedro Trigo, s.j.*



RELIGIÓN DIGITAL

El documento de Puebla, de cuya aparición se cumplen cuarenta años, no es coyuntural sino, como el de Medellín, de largo aliento. Por eso contiene diversidad de textos que arrojan mucha luz para la transición política, antropológica y social tan anhelada en Venezuela, esa que desde ya nos esforzamos en construir. Transcribimos aquí los que nos parecieron más significativos, señalando a su vez qué nos dice cada uno a nosotros hoy

Primero. Comienzo recalcando que el documento de Puebla manifiesta que se sitúa en la línea de Medellín: “nos situamos en el dinamismo de Medellín, cuya visión de la realidad asumimos” (Puebla, 25). Esto no es obvio porque en el año 1972 el Vaticano había intervenido el Consejo Episcopal Latinoamericano (Celem) colocando un secretario general frontalmente opuesto a esa línea (López Trujillo) y a Puebla asistieron todos los cardenales de la curia para imponer su autoridad. Tampoco es obvio porque por situarse en la onda de Medellín la Iglesia latinoamericana estaba sufriendo persecución, tanto por parte del Imperio (EE.UU.) como por parte de las oligarquías locales. Supone, pues, una libertad realmente evangélica por parte de la asamblea hacer esta declaración.

+ Esta libertad evangélica es, pues, lo primero que se nos pide hoy en nuestro país para no ser reaccionarios contentándonos con buscar salir del gobierno, sino enfocarnos en pergeñar una alternativa superadora y dirigirnos hacia ella.

Segundo. Ante todo, anotan que la situación ha empeorado: “

Comprobamos, pues, como el más devastador y humillante flagelo, la situación de inhumana pobreza en que viven millones de latinoamericanos expresada, por ejemplo, en mortalidad infantil, falta de vivienda adecuada, problemas de salud, salarios de hambre, desempleo y subempleo, desnutrición, inestabilidad laboral, migraciones masivas, forzadas y desamparadas, etc. (Puebla, 29)

No solo ha empeorado la situación objetiva, sino más todavía la conciencia de su injusticia insoportable:

Desde el seno de los diversos países del continente está subiendo hasta el cielo un clamor cada vez más tumultuoso e impresionante. Es el grito de un pueblo que sufre y que demanda justicia, libertad, respeto a los derechos fundamentales del hombre y de los pueblos. (Puebla, 87)

Es cierto que nuestra situación es tan mala, que ningún venezolano adulto habría podido imaginar que íbamos a caer tan bajo; los indicadores del texto la expresan plásticamente. También es cierto que Chávez había encantado a parte de nuestro pueblo, pero hoy la inmensa mayoría clama por el respeto a sus derechos fundamentales, hoy conculcados.

+ En una alternativa superadora tenemos que revertir la pobreza. No basta con el aumento del PIB.

Tercero. Chávez fue totalitario: se propuso cambiar todo porque juzgaba que era negativo y pensaba que todos tenían que seguir sus dictados para llegar a la máxima felicidad. Fracaso. No nos llevó a ninguna parte porque concibió derechos y no deberes y propuso un socialismo rentista, que además de ser un círculo cuadrado, redujo a sus adherentes a la condición de adolescentes. Sus sucesores solo pretenden atorni-

llarse en el poder porque se han dedicado a saquear al país. Por eso es acertado el diagnóstico de Puebla referente a que la riqueza absolutizada lleva a la corrupción:

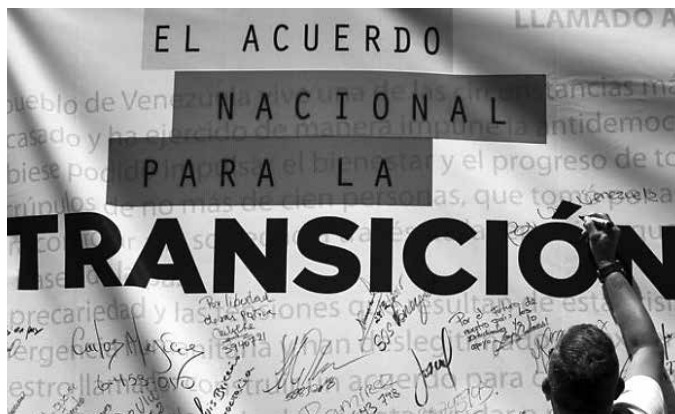
La riqueza absolutizada es obstáculo para la verdadera libertad. Los crueles contrastes de lujo y extrema pobreza, tan visibles a través del continente, agravados, además, por la corrupción que a menudo invade la vida pública y profesional, manifiestan hasta qué punto nuestros países se encuentran bajo el dominio del ídolo de la riqueza. (Puebla, 494)

+ En una alternativa superadora ni el enriquecimiento de los empresarios ni el de los políticos puede ser el objetivo directo. Este tiene que ser la creación de la riqueza nacional, estructural, no solo económica sino, más aún, humana: pasar de condiciones de vida menos humanas a más humanas.

Cuarto. Como Medellín, Puebla califica a esta situación de injusticia institucionalizada, que engendra violencia. En nuestro caso la injusticia estructural, de una magnitud desconocida en Nuestra América, consiste en que el Gobierno, empeñado solo en perpetuarse y no en gobernar, se ha tragado al Estado: “Dicha violencia es generada y fomentada, tanto por la injusticia, que se puede llamar institucionalizada en diversos sistemas sociales, políticos y económicos, como por las ideologías que la convierten en medio para la conquista del poder” (Puebla, 509). Las grandes palabras, la ideología, como denuncia el documento, sirven de tapadera al saqueo.

De este saqueo forman parte las corporaciones globalizadas, como señala el documento: “en muchos casos el poderío de empresas multinacionales se sobrepone al ejercicio de la soberanía de las naciones y al pleno dominio de sus recursos naturales”. En nuestro caso porque como no hay Estado, el Gobierno improductivo pacta con ellas, sobre todo grandes compañías mineras, pero también petroleras o de construcción, en condiciones muy desventajosas para la nación, para que le den recursos, que nadie sabe adónde van, a costa de destruir el hábitat sin importarle cuantas obras, que habrían resultado muy útiles para la gente, queden inconclusas. Este es un aspecto que en una alternativa superadora hay que revisar, porque el Gobierno, a pesar de su soflama antiimperialista, nunca ha tenido el menor empacho en negociar con compañías transnacionales en términos muy desfavorables para el país y en desmedro de la empresa venezolana.

+ En una alternativa superadora este es el punto de honor porque las potencias que han ayudado no tienen ningún interés en el país sino salvaguardar sus intereses, que son sus cor-



LA PATILLA

poraciones. Si no se resiste a esta presión, estamos en más de lo mismo, se diga lo que se diga.

Quinto. El Gobierno casi ha acabado con la empresa privada y ha quebrado tanto las empresas estatales como las más de quinientas que robó. Por eso casi no hay productividad ni producción en el país, que es lo que denuncia el documento de Puebla: “la tendencia a la pauperización y a la exclusión creciente de las grandes mayorías latinoamericanas de la vida productiva. El pueblo pobre de América Latina, por tanto, ansía una sociedad de mayor igualdad, justicia y participación a todos los niveles” (Puebla, 1207). En nuestro país ansiamos trabajo productivo y el Gobierno lo impide sistemáticamente.

+ Propiciar la creación de trabajo productivo para las grandes mayorías es un tema imprescindible para una alternativa superadora.

Sexto. Puebla insiste en la falta de educación como causa de subdesarrollo: “La situación de pobreza de gran parte de nuestros pueblos está significativamente correlacionada con los procesos educativos. Los sectores deprimidos muestran las mayores tasas de analfabetismo y deserción escolar y las menores posibilidades de obtener empleo” (Puebla, 1014). Como no hay Estado, no hay servicios: ni agua, ni luz, ni seguridad, ni salud, ni educación.

+ En una alternativa superadora tiene que haberlos, pero no privatizados como en Chile y por eso inasequibles para el pueblo y fuente de discriminación permanente.

Séptimo. Hoy los que mandan no quieren soltar el mando porque se han entregado al dinero. Así lo denuncia Puebla: “Esta situación de injusticia estructural es proclive al abandono de los valores auténticamente humanos, aunque a su vez no se daría si no hubiera personas influyentes que los hubieran abandonado completamente, entregándose al ídolo del dinero (Puebla, 493-497) y del poder (Puebla, 500,502)”. Esto se está llevando a cabo tan fuera de todo cauce institucional y de todo derecho que es el obstáculo de fondo para cualquier negociación.

El documento se refiere al “deterioro de la honradez pública y privada”. El Gobierno ha popularizado la corrupción.

+ Por eso va a ser necesario un proceso muy difícil pero imprescindible en orden a la rehabilitación de tantos que se han dejado corromper. Sin ese proceso no hay alternativa superadora. Y ésta tiene que incluir mecanismos muy firmes para que se corte de raíz la corrupción y más todavía poner como jueces en toda la línea del Poder Judicial, no a personas de cada bando en

equilibrio de fuerzas, eso sería más de lo mismo, sino a independientes probos y solventes.

Octavo. Puebla denuncia el poder ideológico:

Los rasgos culturales que hemos presentado se ven influidos fuertemente por los medios de comunicación social. Los grupos de poder político, ideológico y económico penetran a través de ellos sutilmente el ambiente y el modo de vida de nuestro pueblo. Hay una manipulación de la información por parte de los distintos poderes y grupos. (Puebla 62)

Esta capacidad de dar siempre su versión, aunque nada tenga que ver con la realidad y repetirla hasta que cale como si fuera verdad, es el gran logro del Gobierno para sus fines. Hay que denunciarlo y sobre todo superarlo, comprometiéndose siempre con la verdad y haciendo justicia a la realidad.

+ En una alternativa superadora hay que impedir que el gobierno cope medios. Hay que tener medios solventes, pero del Estado, comprometidos con los objetivos más trascendentes de la Constitución y no del gobierno, ni de la empresa privada.

Noveno. Para cortar la raíz de estos males Puebla insiste en la necesidad de conversión y la concreta convincentemente:

El cambio necesario de las estructuras sociales, políticas y económicas injustas no será verdadero y pleno si no va acompañado por el cambio de mentalidad personal y colectiva respecto al ideal de una vida humana digna y feliz que a su vez dispone a la conversión. (Puebla, 1155)

+ Nos tenemos que convencer de la necesidad de este cambio de corazón, tal como está explicado. No basta de ningún modo con salir de Maduro. Sin esta conversión, no hay alternativa superadora.

Décimo. Todos estamos concernidos, pero más, los que tienen el liderazgo económico y político:

Sin duda, las situaciones de injusticia y de pobreza aguda son un índice acusador de que la fe no ha tenido la fuerza necesaria para penetrar los criterios y las decisiones de los sectores responsables del liderazgo ideológico y de la organización de la convivencia social y económica de nuestros pueblos. En pueblos de arraigada fe cristiana se han impuesto estructuras generadoras de injusticia. (Puebla, 437)

+ Creemos que un número significativo de empresarios sí ha aprendido de esta situación

tan dolorosa y por eso son apoyados por sus trabajadores frente al Gobierno. Es preciso que aprendan también muchos políticos de oposición.

Décimo primero. La disposición fundamental de Puebla es la opción por los pobres:

Volvemos a tomar, con renovada esperanza en la fuerza vivificante del Espíritu, la posición de la II Conferencia General que hizo una clara y profética opción preferencial y solidaria por los pobres, no obstante, las desviaciones e interpretaciones con que algunos desvirtuaron el espíritu de Medellín, el desconocimiento y aun la hostilidad de otros. Afirmamos la necesidad de conversión de toda la Iglesia para una opción preferencial por los pobres, con miras a su liberación integral (Puebla, 1134).

También entre nosotros tenemos que proponerla como indispensable. Un sector de clase media y alta tiene mucha dificultad en hacerla, tanto porque había aceptado la lógica neoliberal de desregularizarlo todo, disfrazando de responsabilidad individual lo que en realidad era irresponsabilidad de fondo con su propia humanidad y con la vida de los demás, como porque les parece que ahora los pobres la tienen que pagar por el apoyo que dieron a Chávez. Es cierto que Chávez, como dice el documento, tergiversó esta opción de la que siempre habló, ya que por su mentalidad militar pensó que lo tenían que seguir, no actuó aquí deliberadamente, y dada su capacidad de encantamiento se tragó a los que lo siguieron, que proclamaban con arrobo: “yo soy Chávez”, “todos somos Chávez” sin percatarse de que Chávez les robaba la condición de sujeto con su consiguiente responsabilidad. Ahora para la mayoría se ha roto el encanto, aunque hay algunos que no quieren despertar del sueño porque piensan que de ilusión también se vive.

+ Creemos, pues, que hay que proponer muy explícita y concretamente esta opción. Sin ella no hay alternativa superadora.

Décimo segundo. Esta opción no puede ser meramente asistencialista: dar cosas, como viene haciendo el Gobierno, a cambio de sumisión. Por el contrario, debe transformar las formas de convivencia y las estructuras: “esta opción, exigida por la realidad escandalosa de los desequilibrios económicos en América Latina, debe llevar a establecer una convivencia humana digna y fraterna y a construir una sociedad justa y libre” (Puebla, 1154).

No se pueden sustituir las exigencias costosas de la justicia por una “caridad” descomprometida:

Es de suma importancia que este servicio al hermano vaya en la línea que nos marca el

Concilio Vaticano II: ‘Cumplir antes que nada las exigencias de la justicia para no dar como ayuda de caridad lo que ya se debe por razón de justicia; suprimir las causas y no sólo los efectos de los males y organizar los auxilios de tal forma que quienes los reciben se vayan liberando progresivamente de la dependencia externa y se vayan bastando por sí mismos’. (AA 8) (Puebla, 1146)

La opción por los pobres debe liberar de la dependencia. Por eso este Gobierno que vive de la dependencia clientelar no hizo nunca opción por los pobres, a pesar de sus proclamas.

+ Sería trágico que, por ir en contra de estas proclamas, la oposición no la hiciera. Volvería a ganar el chavismo. La alternativa superadora tiene que incluir esta opción.

Décimo tercero. Sin esta opción nos deshumanizamos radicalmente. Y si somos cristianos, sin ella no podemos amar a Dios. El amor, si es verdadero, tiene que estar dispuesto a sufrir las consecuencias de su ejercicio concreto:

El amor de Dios, que nos dignifica radicalmente, se vuelve por necesidad comunión de amor con los demás hombres y participación fraterna; para nosotros, hoy, debe volverse particularmente obra de justicia para los oprimidos, esfuerzo de liberación para quienes más la necesitan [...] El Evangelio nos debe enseñar que, ante las realidades que vivimos, no se puede hoy en América Latina amar de veras al hermano y por lo tanto a Dios, sin comprometerse a nivel personal y en muchos casos, incluso, a nivel de estructuras, con el servicio y la promoción de los grupos humanos y de los estratos sociales más desposeídos y humillados, con todas las consecuencias que se siguen en el plano de esas realidades temporales. (Puebla, 327)

+ La oposición tiene que convencerse que no se puede enfocar todo a que aumente el Producto Interno Bruto, tan disminuido. Es preciso enfocarse directamente en que haya trabajo productivo y bien remunerado para las mayorías. Este elemento forma parte esencial de la alternativa superadora.

*Miembro del Consejo de Redacción SIC.

¡Hasta siempre
maestro!

A la Juventud venezolana

Carlos Cruz-Diez*

Fallece a sus 95 años

Carlos Cruz-Diez, artista plástico
venezolano y uno de los máximos
representantes del arte cinético.

En su página web oficial
informaron que ocurrió el 27
de julio en París, Francia.

En tributo a su memoria,
compartimos esta carta dirigida
a los jóvenes de Venezuela en el
marco de las protestas de 2017,
cuyo valor auténtico parecer estar
más vigente que nunca



ATELIER CRUZ-DIEZ

“Escribir este mensaje a todos los venezolanos y en especial a los jóvenes que arriesgan sus vidas diariamente en las calles de Venezuela, nace del dolor y la angustia ante los trágicos sucesos que están agobiando a mi país. Además, quiero manifestar la admiración por la decidida actitud que los ha llevado a enfrentar a un régimen construido sobre un modelo agotado y obsoleto que se ha empeñado en destruir los valores humanos que son la única garantía para construir una sociedad basada en la dignidad, el progreso y la justicia social. También quiero decirles que están viviendo una oportunidad única, la de cambiar su propio destino y el del país.

Si mi esfuerzo en la vida para lograr ganar un lugar en el mundo del arte puede servirles de referencia, les digo que eso lo logré gracias a realizarlo en un contexto de plena libertad, y *la libertad solo se logra en democracia*. Una libertad sin prejuicios ni dogmas. Considero que esto último es la condición necesaria para poder abordar seriamente la crisis de modelos que afrontamos en Venezuela en el presente.

Durante el régimen de terror que instauró la dictadura militar de Pérez Jiménez, que me tocó vivir y padecer, era sabido que la gente, en especial los opositores detenidos por la Seguridad

Nacional, padecían torturas y en muchos casos desaparecían sin dejar rastros. Yo me fui de Venezuela porque eso era una situación humillante, allí no había lugar para la cultura ni el arte. El objetivo de un militar es destruir o demoler al enemigo. Al contrario, el arte es generoso, un artista sirve para enriquecer el espíritu de sus semejantes. El arte en todas sus manifestaciones, la poesía, la literatura, la música, la danza, el teatro, la pintura, todos esos son nutrientes para el espíritu de un pueblo.

Fueron los mismos militares junto a la resistencia civil organizada los que derrocaron al dictador, instalando en Venezuela una junta de gobierno que propició el retorno a la democracia, las elecciones y el pacto de Punto Fijo. Este último fue un acuerdo unánime de los partidos políticos para lograr la gobernanza, aunque algunos lo utilizaron para repartirse la riqueza en lugar de administrarla. También les digo que he sido testigo de la transformación del concepto de “país” y de “patria” en un lugar para el usufructo y el despojo para beneficio de unos cuantos.

Sin embargo, con la democracia y durante 40 años, el país vivió una dinámica actividad cultural sin precedentes: los grandes museos, los festivales teatrales y el movimiento musical, entre otros, fueron motivo

de reseñas culturales en todo el continente. Solo se nombraban dos ciudades relevantes en la cultura: Nueva York y Caracas. Después vino la “Revolución”, que es una palabra arcaica, del siglo XVIII, esa palabra hoy no tiene sentido, carece de significado. Vivimos el comienzo de una nueva civilización, de nuevos paradigmas, no de una revolución. La llamada “revolución” acabó con todo lo que se había construido en democracia.

Pienso que los conceptos políticos son propósitos para regular, equilibrar el justo desarrollo, evolución y progreso de la sociedad. A veces esos conceptos toman un giro cuasi religioso, convirtiéndose en doctrinas con sus inevitables dogmas. Conducir la economía de un pueblo basándose en un dogma, es contradictorio porque un dogma no es necesariamente una verdad ni corresponde al comportamiento de la sociedad. El dogma es una creencia, un supuesto que pretende volver estático e inamovible el pensar y sentir del individuo que está en una continua evolución.

En Venezuela, ha sido trágico para el país que los desposeídos de “entendimiento y razón”, como dice la tonada margariteña, hayan tomado el poder, procediendo a la destrucción de las instituciones democráticas que son la garantía de la libertad y el progreso humano.

El ignorante promueve la ignorancia, sin darse cuenta de que está provocando el aislamiento y la destrucción de su propio país y que al final, conllevará irremediablemente a su propia destrucción. Digo esto como artista, ya que el arte no tiene ideología. *Si el arte fuese una ideología impregnada de fanatismo, necesitaría aplastar, encarcelar, torturar o matar a sus enemigos para hacerse entender.* Ningún artista mata a otro porque no le guste su discurso. Pero vemos que no sucede así en la política en esta hora aciaga que vive Venezuela.

A esto se suma la dificultad de los líderes, de los baquianos para ayudar a encontrar el camino, así como la falta de motivación del ciudadano para consigo mismo, que le permita superarse y borrar de su mente la idea de que es más fácil ser limosnero. *Cada quien tiene que pensar en ser autónomo, autosuficiente y generar riqueza para sí y para los demás.* A los jóvenes los animo a que se planteen estos objetivos. Hay mucha gente pensante, inteligente en nuestro país, por eso tengo la esperanza que un cambio definitivo se aproxima. Es una certeza, de allí la motivación para compartir estas reflexiones.

En lo personal creo en la necesidad de una educación que sirva para razonar, crear e inventar una nueva organización

social y económica de la sociedad y sacudirse de las religiones políticas obsoletas, contribuir a desacralizar todo aquello que ha producido falsas creencias y mitos que tanto daño nos han ocasionado.

De no plantearnos con urgencia un cambio en las percepciones y conceptos que nos conduzcan a una nueva manera de ver el país, las consecuencias serán dramáticas. He visto con dolor la diáspora de jóvenes talentos que han salido del país y las fotografías de sus partidas sobre mi obra en el aeropuerto de Maiquetía. Solo espero que ésta sea un motivo de reencuentro en un futuro cercano.

Los valores democráticos y éticos de los jóvenes venezolanos de hoy en día contrastan con los de quienes han administrado el poder en los últimos cincuenta años y más aún con los que han gobernado en los últimos dieciocho años. Con base en esos valores, los invito a reflexionar sobre los nuevos paradigmas que es necesario crear ante el modelo ya agotado que vive nuestro querido país y evitar así la repetición de episodios lamentables en el futuro.

A mis 94 años, les digo con sinceridad que les ha tocado vivir una época extraordinaria porque todo está obsoleto y hay que inventarlo de nuevo, hay que inventar un nuevo lenguaje político que hable de democracia, de valores éticos, de libertad, progreso y justicia social, hay que inventar la educación y crear un país de emprendedores, artistas e inventores, un país digno y soberano en el contexto global, en fin, en Venezuela hay que inventarlo todo ¡Qué maravilla!

Ciudad de Panamá, abril 2017.”

*Artista venezolano (+).



REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS

FUENTE:

Prodavinci (28 de julio 2019): *Lea la carta que Carlos Cruz-Diez le escribió a la juventud venezolana.* Recuperado de: <https://prodavinci.com/lea-la-carta-que-carlos-cruz-diez-le-escribio-a-la-juventud-venezolana/>



NOTIMEX / ARTURO MONROY

El gran reto de una respuesta humana

América: un continente en movimiento

Carolina Jiménez Sandoval *

Los seres humanos nos movemos por una gran variedad de razones, desde la necesidad de sobrevivencia pura —que da origen al concepto mismo de desplazado interno o persona en necesidad de protección internacional— hasta por razones menos urgentes. Aun así, pese a que la migración internacional, voluntaria o forzada, demanda una respuesta basada en criterios de protección para quienes migran, la realidad es otra y esta no puede ser afrontada de manera aislada

América se mueve. Tanto que, en lo que va del 2019, se advierte el deterioro de lo que algunos analistas han denominado “el trío de las crisis migratorias”, a saber: la venezolana, la nicaragüense y la crisis del llamado Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras). A pesar de las diferencias y peculiaridades de cada país o subregión, conforme sea el caso, los ciudadanos provenientes de estos lugares guardan una necesidad y una esperanza común: que los gobiernos de los países por donde transitan y se hospedan garanticen sus derechos y que las comunidades receptoras sepan aprovechar los beneficios que trae consigo la migración.

Vale la pena entonces analizar las causas y principales problemáticas de estas crisis de movilidad humana experimentadas en la región, en el entendido de que no constituyen los únicos flujos migratorios que impactan al hemisferio, pero sí aquellos que, por sus características, requieren de un abordaje regional urgente basado en una perspectiva amplia de derechos humanos.

SE PARTIÓ EN NICARAGUA, OTRO HIERRO CALIENTE...

Es difícil describir cómo —hasta cierto punto— el estallido de la crisis social y política nicara-

güense tomó a muchos por sorpresa. Durante varios años líderes sociales, activistas políticos y organizaciones no-gubernamentales, venían llamando la atención sobre temas como la violencia de género, la discriminación y violencia hacia los pueblos indígenas del país y, más recientemente, la lucha contra la construcción de un “Gran Canal Interoceánico” propuesto y planeado por el presidente Daniel Ortega sin ningún tipo de consulta legítima a las comunidades que serían directamente afectadas por la construcción de un megaproyecto que, literalmente, partiría al país en dos.

Gobernado durante tres mandatos consecutivos por Ortega y con su esposa, Rosario Murillo, en la posición de vicepresidenta desde enero de 2017, el país había mostrado señales de enrumbarse a un clima de mayor represión en contra de las voces disidentes que justamente reclamaban sus derechos. Aun así, pocos esperaban que los eventos de abril del 2018 (protestas pacíficas de ciudadanos en desacuerdo con una propuesta de reforma al sistema de seguridad social) desencadenarían una de las olas de represión más brutales que ha vivido el país desde el fin de su guerra civil.

Lo que empezó como represión de protestas por parte de agentes de seguridad, se convirtió con el pasar de los meses en una estrategia deliberada de violencia organizada desde el gobierno de Daniel Ortega, que no solo incluía el uso de las fuerzas de seguridad pública sino que involucraba el accionar de las llamadas “turbas sandinistas”, grupos que se transformaron en cuerpos parapoliciales armados y que a su vez generaron mayor indignación popular en distintas partes del país dado el nivel de represión experimentada.

La segunda mitad de 2018 presencié modos distintos de protesta popular, especialmente en la forma de levantamiento de barricadas (“tranques”) en distintas localidades del país que no solo representaron un rechazo a las políticas del Presidente, sino también una estrategia de defensa ante los ataques contra la población civil. La respuesta del gobierno orteguista fue el recrudecimiento de la represión. Según datos aportados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para finales de 2018 se reportaban 325 personas muertas y más de 2 mil heridas desde el inicio de la crisis en el mes de abril¹.

No es de sorprender que la situación descrita generara la salida de miles de nicaragüenses de sus comunidades, en un país de por sí históricamente emisor de migrantes. Por años, miles de nicaragüenses han migrado principalmente a Costa Rica para mejorar económicamente su situación de vida. No obstante, el éxodo registrado en 2018 y 2019 tiene una característica que le distingue: en su gran mayoría son personas en necesidad de protección internacional y, por

tanto, puede afirmarse que es un flujo de refugiados.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), un año después del inicio de la crisis en Nicaragua, al menos 65 mil personas habían abandonado su país, de los cuales unos 55 mil habrían cruzado la frontera con Costa Rica para solicitar asilo en este país vecino. Entre los solicitantes de asilo hay estudiantes, antiguos funcionarios, líderes de la oposición, periodistas, médicos, defensores de derechos humanos y agricultores, y además muchos se encuentran en necesidad de recibir atención sanitaria, apoyo psicológico, alojamiento y ayuda alimentaria².

La situación, sin duda, representa un gran reto para el país receptor. Si bien un número importante de nicaragüenses ha podido solicitar asilo (unos 29 mil 500 para el mes de abril de 2019), el alto número de personas que ha llegado en un solo año ha generado retrasos y desbordamiento de un sistema de acogida de refugiados que no estaba preparado para una crisis de esta magnitud, léase Costa Rica, donde al menos 26 mil personas estaban, para la misma fecha, a la espera de poder realizar las solicitudes de asilo.

LA CRISIS MIGRATORIA VENEZOLANA: LA NOTICIA PERENNE

Puede considerarse esta una de las crisis más profundas de movilidad humana forzada en la historia de toda América. Las causas son múltiples y vienen dadas como consecuencia directa de la emergencia humanitaria compleja que Venezuela experimenta desde hace varios años, con graves afectaciones al derecho, la salud y a la alimentación, a lo que se suma la violación de derechos civiles y políticos en el marco de ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil por parte de las fuerzas de seguridad del Estado que, según han señalado organizaciones internacionales de derechos humanos, podrían constituir crímenes de lesa humanidad³. En una publicación previa para *SIC Digital*⁴, se mencionan tres características importantes de la crisis migratoria venezolana:

1. **Magnitud:** la cifra disponible más actualizada ubica al número de migrantes venezolanos en el mundo en 4 millones 296 mil 777 personas⁵. Esta cifra, impensable hace apenas unos años, se ha convertido en noticia perenne, especialmente en los países suramericanos que albergan entre el 80 y 90 % de ellos. Los medios continúan reflejando el flujo incesante de venezolanos que migran, no tanto por su novedad sino por la continuidad del fenómeno y su alta probabilidad de incrementarse.
2. **Celeridad:** Venezuela se ha convertido en un país que expulsa a sus ciudadanos con velocidad extraordinaria. Según datos de las

Naciones Unidas, 123 mil 406 migrantes venezolanos fueron registrados en países de Latinoamérica y el Caribe en el 2015. La proyección para finales de 2019 es que alcance los 5.3 millones de personas⁶.

3. *Cambio y diversidad de la población que migra forzada*: la población venezolana que emigra, hoy en día, ya no está representada por grupos con un alto grado de formación profesional y académica. Aunque este continúa, ha existido en los últimos años un cambio importante en su perfil socio-económico debido al aumento considerable de personas en situación de pobreza.

EL SALVADOR, HONDURAS Y GUATEMALA: LA BÚSQUEDA DEL “SUEÑO AMERICANO” QUE NO SE DETIENE

El corredor migratorio Triángulo Norte de Centroamérica-México-EE.UU. ha sido por décadas uno de los más activos y dinámicos del mundo. Aunque por años la migración mexicana a los EE.UU. constituyó el principal número de migrantes irregulares cruzando la frontera sur, en los últimos años ha habido un descenso en el crecimiento de la población migrante mexicana y un aumento de la centroamericana. En términos de detenciones en la frontera (un indicador importante, pero que no toma en cuenta poblaciones migrantes ya residentes en el país), el 2018 cerró con la detención de aproximadamente 223 mil centroamericanos y 152 mil mexicanos, lo cual describe un notable incremento de los primeros en materia de cruces fronterizos hacia EE.UU. anualmente⁷.

A pesar de que esta migración es “histórica”, existen elementos que han demostrado la alta vulnerabilidad de las personas migrantes del Triángulo Norte. En primer lugar, *hay una importante presencia de niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes no acompañados y de unidades familiares*. En el año fiscal 2018, la Oficina de Aduanas y Protección Fronterizas (CBP, por sus siglas en inglés) detuvo en la frontera México-EE.UU. a 38 mil NNA migrantes no acompañados y a casi 104 mil personas que viajaban en unidades familiares desde El Salvador, Honduras y Guatemala. Hasta junio de 2019 las detenciones de migrantes en familias ya triplicaban las efectuadas en el 2018 (363 mil)⁸.

Por otra parte, las caravanas de migrantes que fueron noticia en el 2018, pusieron en evidencia las razones por las cuales las personas huyen de sus países: *situaciones de violencia generalizada, desigualdad y pobreza*, continúan siendo gravísimas.

Aunado a lo anterior, el *factor Trump*: la política antinmigración en EE.UU. tiene un profundo impacto en el disfrute de los derechos humanos de las personas de Centroamérica que

apuestan por cumplir el “sueño americano”. Su influencia sobre las políticas migratorias mexicanas y las distintas barreras que ha puesto, incrementa progresivamente el riesgo y la desprotección de miles de refugiados y migrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras.

El “difícil trío” de crisis migratoria que se evidencia hoy en América tiene una cosa en común: no puede ser solucionado de manera aislada por cada país. Dada sus amplias magnitudes, la desprotección de las personas migrantes y el peligro que representan las políticas anti-inmigratorias del presidente Trump y su efecto dominó sobre otros países, se requiere que miembros responsables de la comunidad internacional puedan promover nuevos espacios de discusión y tomas de decisiones donde la migración forzada sea asumida desde una perspectiva de derechos humanos, y no como una amenaza para las comunidades receptoras.

*Internacionalista venezolana.

NOTAS:

- 1 Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “CIDH denuncia agravamiento de la represión y el cierre de espacios democráticos en Nicaragua”, 19 de diciembre de 2018, disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2018/273.asp>
- 2 ACNUR: “Nicaragua: Un año después del inicio de la crisis más de 60,000 personas se han visto forzadas a huir del país”, 16 de abril de 2019, disponible en <https://www.acnur.org/noticias/briefing/2019/4/5cb5eb1c4/nicaragua-un-ano-despues-del-inicio-de-la-crisis-mas-de-60000-personas.html>
- 3 Al respecto, véase: Amnistía Internacional: *Hambre de Justicia. Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela*, mayo 2019, disponible en: <https://www.amnesty.org/es/documents/amr53/0222/2019/es/>
- 4 Véase Carolina Jiménez Sandoval: “Migración Forzada, una mirada urgente desde los DDHH”, en *SIC Digital*, 13 de Mayo 2019, disponible en: <https://revistasic.gumilla.org/2019/migracion-forzada-una-mirada-urgente-desde-los-derechos-humanos/>
- 5 Cifra de la “Plataforma Regional de Coordinación Inter agencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela” establecida por solicitud del Secretario General de las Naciones Unidas al ACNUR y la OIM en abril del 2018 para dirigir la respuesta del organismo ante la crisis de movilidad humana venezolana. Disponible en: <https://data2.unhcr.org/es/situations/platform>
- 6 United Nations: *Regional Refugee and Migrant Response Plan for Refugees and Migrants from Venezuela* (P. 8), diciembre 2018 (disponible en <https://news.un.org/es/story/2018/12/1448011>)
- 7 Kevin Sieff: “Why is Mexican migration slowing while Guatemalan and Honduran migration is surging?”, en *The Washington Post*, 29 Abril 2019, disponible en https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/why-is-mexican-migration-slowing-while-guatemalan-and-honduran-migration-is-surging/2019/04/28/fad52432-6493-11e9-a698-2a8f808c9cfb_story.html
- 8 Allison O’Conner y otros: “Central American Inmigrants in the United States”, Migration Policy Institute, Agosto 2019, disponible en <https://www.migrationpolicy.org/article/central-american-immigrants-united-states>



EL ESTÍMULO

Al margen de la realidad

Entre el 25 y 28 de julio se realizó el XXV encuentro del Foro de São Paulo en Caracas, siendo esta la segunda ocasión que las organizaciones de izquierda usan la capital de Venezuela como centro para la discusión de sus ideas. La primera ocurrió en el 2012, con un Hugo Chávez todavía vivo, pero con una salud en franco deterioro; ya para ese momento se podía divisar la ineficiencia oficial por parte del régimen, que hoy se hace tangible en prácticamente todos los sectores de la sociedad

En julio de 1990 se creó el Foro de São Paulo, con el fin de intercambiar ideas entre los partidos de la izquierda latinoamericana y “hacerle frente a la arremetida neoliberal en el continente”. Así, lo que se parecía más a un *think tank*, hoy figura como grupo defensor de uno de los peores gobiernos de la historia venezolana, ampliamente “atacado por el imperialismo”.

La realidad de 2012 a la de ahora es muy diferente: Nicolás Maduro es cuestionado tanto interna como externamente; hay críticas de agrupaciones e individualidades que alguna vez simpatizaron con el *proceso*; un ejemplo de esto lo vemos en la organización Unidad Política Popular (UPP89) y el exministro de petróleo y expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, quienes enviaron un mensaje a los delegados del encuentro, alertando el deterioro de la calidad de vida de millones de venezola-

nos y acusando al régimen de no cumplir los principios de la izquierda internacional.

También la crítica hacia los asistentes al evento no se hizo esperar, sobre todo aquellos que por las redes sociales tomaban fotos de los platos que comían en el hotel o en algunos restaurantes para afirmar que: *en Venezuela no se pasa hambre*. Desconociendo, totalmente, la realidad social de un trabajador, que a duras penas sobrevive con el sueldo mínimo que recibe el cual ronda, con suerte, los tres dólares mensuales.

Llamó poderosamente la atención, la ausencia de figuras emblemáticas y partidos claves que son parte del Foro de São Paulo. Destaca la inasistencia de los presidentes de Bolivia y Nicaragua, Evo Morales y Daniel Ortega respectivamente; así como la del expresidente uruguayo, Pepe Mujica; también faltaron delegados del Partido

Socialista Chileno, del PRD panameño y su par dominicano, siendo estas dos últimas organizaciones gobernantes en sus países.

Los delegados al Foro recorrieron Caracas en transporte privado y vehículos particulares, vieron la ficción que quiso mostrar el madurismo hacia el exterior, en un burdo intento por aumentar una credibilidad que está por el suelo. El encuentro solo sirvió para gastar el dinero público en un *show* y denunciar los ataques imperiales hacia la *dignidad del pueblo de Bolívar*.

Al final se realizó una declaración sobre el encuentro, que terminó siendo más una carta de buenos deseos, defensa hacia el gobierno de Maduro y condena al bloqueo estadounidense. El texto ataca a los gobiernos de corte *neoliberal*, como el de Lenin Moreno en Ecuador, siendo este dirigente de un partido adscrito también al Foro; acusa a Luis Almagro, secretario de la OEA, de ser un *peón del imperio*, luego que muchos miembros del Foro lo impulsaron a asumir el cargo dentro de la institución regional; apoya directamente las candidaturas presidenciales de Alberto Fernández en Argentina y de Daniel Martínez en Uruguay, justo cuando estos dos políticos han acusado al gobierno venezolano de ser una dictadura.

La declaración no menciona nada del informe de Michelle Bachelet, tampoco se habla de la defensa o protección de los derechos humanos en general. Solo se desarrollan algunas líneas para la lucha del colectivo LGBTI y sobre los derechos de la mujer, ignorando o desconociendo que en países como Venezuela no se cumplen las garantías a los movimientos que promueven dichos derechos.

UN APAGÓN MÁS...

En la tarde del lunes 22 de julio, Venezuela vivió otro apagón general; el octavo en me-

nos de seis meses. Nuevamente millones de personas quedaron a oscuras, incomunicadas y bajo la incertidumbre de cuánto tiempo podía durar dicha situación. En algunos lugares del país los ciudadanos estuvieron más de 24 horas sin servicio eléctrico.

Nuevamente, la versión oficial ante la contingencia, fue un *ataque electromagnético* hacia el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Ya el ingeniero Winston Cabas, experto electricista, hacía la advertencia de la debacle del sistema y la alta posibilidad de que se repitiera otro apagón como el vivido el pasado 22 de julio, por la falta de inversión, mantenimiento y, en muchos casos, corrupción dentro de Corpoelec para la adecuación del SEN a la demanda energética.

Diosdado Cabello, dirigente del PSUV y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, pidió la detención de Cabas por *advertir sobre el apagón*, lo que conllevó a la persecución del experto en cuestión y la detención de uno de sus hijos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Cabas logró eludir la persecución y se amparó en el exilio para evitar ser una víctima más del régimen, a su hijo lo liberaron, no sin antes haber sufrido tortura por parte de sus captores.

Alertar sobre catástrofes o colapsos en los servicios públicos se está convirtiendo en un pecado, más cuando los eventos ocurren. Ya por los primeros apagones fue detenido el periodista Luis Carlos Díaz, luego que hiciera comentarios sobre las informaciones oficiales. Opinar sobre la crisis o predecir situaciones evidentes se está convirtiendo en algo incómodo para el Gobierno, ¿será casual todo esto?...

Desde el exilio, Winston Cabas volvió a advertir que puede venir un nuevo apagón, sobre todo cuando se reinicie el nuevo año escolar y la demanda eléctrica aumente. Además, fue enfático en señalar que, incluso

desde afuera, “vamos a seguir denunciando la realidad de la crisis del país”.

FINALIZA OTRO AÑO ESCOLAR

El año escolar 2018-2019 se ha caracterizado, para muchos expertos del área educativa, por la alta deserción escolar, la falta de docentes y la pérdida de días de clases, producto de los apagones.

Durante todo el año escolar se tuvieron que realizar planes de contingencia para sustituir a los docentes que renunciaban. De hecho, organizaciones como Fe y Alegría tuvieron que hacer esfuerzos para evitar que muchos niños, niñas y adolescentes perdieran el año, apoyándose en padres y representantes que hicieron suplencia en los puestos donde no había personal.

Las instituciones privadas sufrieron la ola de la crisis tratando de cubrir los costos de mantenimiento de la infraestructura, así como el salario de su personal docente, administrativo y obrero. En algunos casos, cuando tenían que subir la matrícula, tuvieron la visita de las autoridades del Sunde o el Ministerio de Educación, quienes amenazaban con cerrar el colegio si aumentaban los precios de las mensualidades...

La educación pública no escapó tampoco a la crisis, en los lugares donde se realizaba el



AP / ARIANA CUBILLOS

programa de alimentación escolar, la comida comenzó a reducirse, la población estudiantil—gran parte de ella dependiente de ese programa—, vio cómo la escuela ya no era más “el lugar para ir a comer”. Esto motivó la deserción, pues muchos estudiantes se vieron obligados a salir a la calle a buscar sustento, en algunos casos en condiciones precarias, para contribuir con la manutención de sus propias familias.

Por su parte, la delincuencia también hizo de las suyas en las instituciones educativas del país: “robos múltiples de materiales y comida”, es parte de las denuncias de los docentes, lo cual ocasionaba la suspensión de clases o la ausencia de los estudiantes en los planteles. En reiteradas oportunidades se informó de esta situación; sin embargo, como ya es una (terrible) costumbre, las autoridades siguen haciéndose la vista gorda ante los hechos delictivos.

Se calcula que en el año escolar que terminó, los estudiantes llegaron a perder hasta setenta días de clases producto de los apagones, sin que el Ministerio de Educación presentara un plan para la recuperación de los días perdidos. En relación a esto, el ministro Aristóbulo Istúriz reiteró que se cumplía a cabalidad el cronograma escolar, sin anunciar algún plan de recuperación.

El próximo año escolar viene con muchas dificultades, aún más cuando los docentes, dependientes del Estado, reclaman mejoras salariales y laborales que siguen sin ser atendidas, ya que consideran que reciben un “sueldo de hambre” que no les alcanza para vivir.

LLUVIA DE BALAS

El 26 de julio varios periodistas informaron, a través de las redes sociales, la situación irregular que se vivió en la Cota 905, donde funcionarios policiales se enfrentaron a bandas armadas. Durante casi cien minutos hubo



INFOBAE AMÉRICA

ráfagas de disparos que, según los medios, procuraban el control de la zona por parte de los cuerpos de seguridad.

La acción pretendía detener o ultimar a los responsables del asesinato de un funcionario policial, que presuntamente estaban resguardados en la zona. La respuesta de las bandas fue contundente; contaban con un sofisticado armamento, mientras que la policía no tenía ni los equipos, ni la organización para enfrentar a quienes llevan tiempo escondiéndose bajo la protección de algunas autoridades...

La experiencia del Gobierno en las denominadas “Zonas de Paz” se ha convertido en una quimera para apaciguar a los que se dedican a la actividad delictiva. El control de las bandas armadas en varias zonas de Caracas y el resto del país, ha puesto en tela de juicio la capacidad oficial para enfrentar y reducir el crimen.

En los sitios controlados por la delincuencia prosperan los negocios ilícitos: secuestro, robo de vehículos, tráfico de drogas, asesinatos, entre otros. Los policías son recibidos con una *lluvia de balas*, lo que los lleva a hacer frente, con lo que tienen, a quienes poseen mejor armamento y, en muchos casos, están mejor organizados, conocen la zona y pueden sacar a los funcionarios sin mayor esfuerzo.

Tras lo ocurrido en la Cota 905 queda en evidencia que la policía es incapaz de oponerse a la delincuencia. El enfrentamiento del pasado 26 de julio dejó varios funcionarios heridos, vehículos dañados y hasta una tanqueta del Cicpc quedó abaleada por la arremetida de los delincuentes. Sin contar que la tétrica retirada policial fue un síntoma de la debilidad institucional reinante.

Aquel “hombre nuevo” del que tanto habló Hugo Chávez, tiene mucho de delincuente, no conoce las reglas y, si lo hace, prefiere transgredirlas; ha descubierto que el camino de la formación y la rectitud es para los débiles, prefiere ganarse el respeto “a punta de plomo”, ya que así logrará ganar un espacio superior entre los suyos y tener lo que desee... Si muere se convertirá en un mártir y héroe para sus semejantes, teniendo un funeral donde el alcohol y la música dominarán el ambiente.

Así es como el “hombre nuevo”, fruto innegable de “la revolución”, carece de novedad y goza de excesos... que dan miedo.

PEDRO TRIGO, S.J.

La enseñanza social de la Iglesia

Alternativa superadora de la situación



“Dadas las circunstancias actuales en que el hambre y la insania con sus secuelas sociales están afectando a toda la colectividad venezolana, las Iglesia a través de sus instituciones y centros está promoviendo una visión cristiana para la resolución de los problemas. Se trata de formar un laicado sensible, que asuma un compromiso sociopolítico buscando otras alternativas en esta oscurana que vivimos. Por eso saludamos la publicación del libro “La enseñanza social de la Iglesia: alternativa superadora de la situación” (Jesús María Aguirre, s.j.)

Para adquirir nuestros productos, comuníquese al 0212-5649803 y 5645871

www.gumilla.org



Con Pago Móvil BVC ¡Te pago de una!

Solo dame tu número de teléfono móvil y listo
Así cobras la cuenta sin el rollo de la línea o el punto de venta
¡Es dinero al instante desde mi celular a tu celular!